



#2

**Octubre/
noviembre
2020**

Trabajo agrario y ruralidades en transformación

**Presente y
futuro del
trabajo agrario**

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Trabajo agrario,
desigualdades
y ruralidades**

 **CLACSO**

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Hubert C. de Grammont
Mariela Blanco
Adriana Saldaña Ramírez
Alberto Riella
Luciano Martínez Valle
Fabián Almonacid Z.
María Aparecida de Moraes Silva
Luis Camarero

Trabajo agrario y ruralidades en transformación : Presente y futuro del trabajo agrario : número 2, Octubre-Noviembre 2020 / Hubert C. de Grammont... [et al.] ; coordinación general de Germán Quaranta ; Paola Mascheroni.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020.

Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-722-727-7

1. Mercado de Trabajo. 2. Campo. I. Grammont, Hubert C. de. II. Quaranta, Germán, coord. III. Mascheroni, Paola, coord.

CDD 306.364



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Gustavo Lema - Director de Comunicación e Información

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

María Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - Coordinadora

Cecilia Gofman, Giovanni Daza, Rodolfo Gómez, Teresa Arteaga
y Tomás Bontempo.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito
que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> |
<www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Coordinador/a:

Germán Quaranta

Centro de Estudios de
Investigaciones Laborales
Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas
Argentina

gquaranta@ceil-conicet.gov.ar

Paola Mascheroni

Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República
Uruguay

pmascheroni@gmail.com

Contenido

- 5 Presentación**
- 6 Una reflexión sobre el futuro de los mercados de trabajo agrícolas después de la pandemia**
Hubert C. de Grammont
- 13 Desafíos de la movilidad en la ruralidad frente al COVID- 19, Argentina**
Mariela Blanco
- 25 Trabajadores agrícolas migrantes en México**
Retos para su atención en el contexto de la pandemia de COVID-19
Adriana Saldaña Ramírez
- 35 Asalariados rurales en escenario de post-pandemia en Uruguay**
Alberto Riella
- 42 De la protesta social a la desregulación del mercado de trabajo rural en Ecuador en la coyuntura del COVID-19**
Luciano Martínez Valle
- 53 El campo en tiempos de crisis, Chile, 2019-2020**
Fabián Almonacid Z.
- 74 ¿De qué crisis estamos hablando?**
Los beneficios de la pandemia para la producción de commodities brasileñas
Maria Aparecida de Moraes Silva
- 93 Crisis y desigualdad social**
Una lectura de la brecha rural-urbana
Luis Camarero
- 102 Próximas actividades**
- 103 Conversatorios virtuales realizados**

Trabajo agrario y ruralidades en transformación
Número 2 · Octubre-noviembre 2020

| Presentación

Es un gusto presentar el segundo boletín organizado por el Grupo de Trabajo CLACSO “Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades”. Este boletín recoge las reflexiones realizadas en el marco de los Conversatorios Virtuales ‘El trabajo rural y la movilidad frente a los desafíos de la post pandemia’; y ‘Desigualdades, protesta social y crisis en la ruralidad’.

En ellos, las investigadoras e investigadores del GT nos invitan a continuar debatiendo sobre cómo las desigualdades sociales se producen, reproducen y cambian constantemente en los mundos rurales de nuestro continente, a partir de las realidades de México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil y España.

A su vez, nos invitan a pensar no sólo en los impactos de la pandemia en el trabajo agrario y las sociedades rurales hoy en día, sino también en cuáles serán los efectos a mediano y largo plazo en los grupos más vulnerables de la producción agraria y la sociedad rural.

Paola Mascheroni y Germán Quaranta
Coordinadores del Grupo de Trabajo CLACSO
Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades

Una reflexión sobre el futuro de los mercados de trabajo agrícolas después de la pandemia

Hubert C. de Grammont*

En este texto intento prever que puede pasar con los mercados de trabajo agrícolas en un futuro cercano (10-15 años) si se mantiene la amenaza de esta o de nuevas pandemias. Pensar en el futuro conlleva riesgos, por eso mi planteamiento tiene cierto nivel hipotético, pero me parece que la información disponible hoy permite plantear una hipótesis de trabajo razonable.

Si hablamos de los mercados de trabajo de los asalariados agrícolas, hablamos de las empresas agrícolas que producen para el mercado, y por lo tanto esencialmente para abastecer las ciudades en donde vive actualmente el 56% de la población mundial. Pueden ser desde pequeñas empresas familiares hasta enormes empresas transnacionales que tienen la capacidad de controlar cientos de miles de hectáreas en diferentes partes del mundo (land grabbing). Este es nuestro mundo de referencia.

* Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

Por su lado, las unidades de producción de autosubsistencia participan como oferta de trabajo asalariado en las empresas agrícolas mercantiles.

El dominio de las cadenas globales

Con la tercera revolución tecnológica surge un nuevo modelo de acumulación en la industria y en la agricultura, controlado por las cadenas globales de valor. Con la cuarta revolución tecnológica este modelo se consolida a pasos agigantados.¹ Si bien existen aún productores “independientes”, la mayor parte de la producción agrícola se obtiene en una agricultura “tercerizada”, integradas a las cadenas globales de valor. Este nuevo dominio del capital global cambió totalmente las condiciones de los mercados de trabajo industriales pero también agrícolas.

Los cultivos intensivos en mano de obra asalariada son esencialmente las frutas, hortalizas, flores y algunos productos agroindustriales de plantación como la caña de azúcar, el algodón o la palma africana, en algunos países el café. En esos cultivos, ciertas partes del proceso productivo, en particular la cosecha, siguen siendo manual no porque no existen tecnologías que la pueda sustituir, sino porque se dispone de una mano de obra barata, abundante, cada vez más precarizada ya no sólo por sus empleadores sino también por los nuevos programas gubernamentales de trabajo temporal que se expanden en el mundo entero, y cada vez más involucrada en procesos de movilidad o circulación de gran distancia. Esta enorme masa de fuerza de trabajo “minorizada” (Lara, 1998, p.122) reduce los costos del trabajo a su estricto nivel de sobrevivencia (por eso se habla de trabajo esclavo) y permite obtener sobreganancias en comparación con el uso de las tecnologías que podrían sustituirla.

¹ La tercera revolución tecnológica se inició en los años setenta y se caracteriza por la creación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mientras la cuarta se caracteriza por la convergencia de las TIC, con la biotecnología, la ingeniería genética y las neurotecnologías, que permiten crear la inteligencia artificial y la robotización.

Después de la segunda guerra mundial la agricultura vivió un período de mecanización acelerada, en particular con la modernización de los tractores y la posibilidad de conectarles múltiples aperos para realizar todas las labores agrícolas necesarias. Hoy, con la cuarta revolución tecnológica, estamos iniciando un nuevo ciclo de modernización con el uso de la robótica basada en la inteligencia y la visión artificial que permiten realizar tareas tan complejas como la polinización de las plantas, la detección de enfermedades, el análisis de la fertilidad de los suelos o de las deficiencias nutritivas de las plantas, etc. En relación con el tema que nos ocupa aquí, el futuro del trabajo en la agricultura, esas nuevas tecnologías permiten cosechar con mucha eficacia plantas tan diversas como las hortalizas, todo tipo de frutos o productos agroindustriales como el algodón y la caña de azúcar. Las investigaciones sobre lo que algunos llaman “la agricultura inteligente” (“smart farming”) se multiplican con gran velocidad en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Europa Central, pero destacan en China y la India.² América Latina no aparece en esta carrera por la “industrialización de la agricultura”, pero se verá irremediamente incorporada por esta gran transformación por el control ejercido por las cadenas productivas sobre la agricultura.³

Por demás, no hay que descartar la existencia de inercias por parte de los empresarios que no sienten la necesidad del cambio tecnológico mientras estas “masas” de trabajadores cumplen adecuadamente con su papel de abastecedor de fuerza de trabajo sobreexplotada (Nun, 1969). Solo en algunos casos precisos la habilidad manual del trabajador aún no puede ser sustituida por la tecnología, como en el caso de la poda o el injerto de la vid y arboles frutales (Sánchez, 2019a y 2019b). Es notorio que en esos casos los trabajadores acceden a la categoría de “calificados”, a veces con sueldos de muy buen nivel.

² A partir del año 2007, China ha organizado congresos mundiales anuales sobre las tecnologías de punta en la agricultura. Se puede consultar las ponencias en: <https://link.springer.com/conference/ccta>.

³ Hablamos de “industrialización” en la medida en que, con esas nuevas tecnologías, la agricultura depende cada vez menos de los avatares de su entorno natural.

La tercerización de la agricultura

Para entender la situación de los asalariados agrícolas, debemos saber que pasa con las empresas en las cuales trabajan, desde las empresas familiares mercantiles (pequeñas empresas con pocos trabajadores asalariados) y hasta empresas agrícolas gigantescas que tienen la capacidad de controlar cientos de miles de hectáreas en diferentes partes del mundo (land grabbing). Todas dependen del polo integrador de las empresas transnacionales que controlan sus cadenas globales de valor desde tres posiciones que se combinan estrechamente: como productoras de tecnología (desde la producción de maquinaria hasta la de semillas transgénicas o agroquímicos, pasando por los plásticos, los invernaderos, la nanotecnología o los drones); como transformadoras de la producción agrícola (agroindustrias alimentarias); y como comercializadoras de la producción del sector primario (supermercados).

Al igual que en el sector industrial, ellas imponen las tecnologías utilizadas en la “agricultura comercial integrada” para obtener los productos en tiempos, cantidad y calidad adecuada. La generalización de las normas de calidad basadas en la trazabilidad de los productos para controlar su inocuidad, tan importante hoy, es posible gracias al uso de estas nuevas tecnologías.

El dominio de estas cadenas de valor sobre el conjunto de la agricultura comercial propicia:

- la hiperpolarización del propio sector empresarial en donde el tamaño de las empresas agrícolas es cada vez mayor,
- la hiperespecialización de las empresas y por lo tanto de los espacios productivos en función de sus ventajas comparativas (enclaves),
- la transformación organizacional de las empresas mismas que se ven obligadas a utilizar métodos de gestión similares a los del sector industrial o de servicios,

- la cantidad del empleo, las formas de remuneración y las condiciones del trabajo de los asalariados,
- las nuevas formas de segmentación de los mercados de trabajo,
- los flujos migratorios.

Así, la agricultura comercial es en lo esencial una agricultura “tercerizada” y por eso estamos lejos de la tradicional idea de la autonomía del agricultor para organizar su trabajo en su finca. Hoy la función del empresario agrícola, pequeño o grande, consiste en ejecutar los programas productivos establecidos desde arriba. Su margen de decisión empresarial se reduce a menudo a la adaptación de esos programas a las condiciones propias (técnicas, ecológicas y sociales) de su región (C. de Grammont, 2019). Lo mismo pasa en el sector industrial y de los servicios.

Si bien subsiste una agricultura comercial “autónoma”, que surte los mercados locales y las centrales de abasto de las grandes ciudades, su evolución se ve influenciada por las propias cadenas de valor a través de su control sobre los mercados agrícolas globales. Asimismo, una característica de la mundialización es que tanto la industria como la agricultura se ven dominados por los mismos procesos de integración a las cadenas globales. Por eso, y a pesar de las diferencias que subsisten entre ambos sectores productivos, podemos hablar de un proceso de industrialización de la agricultura.

Una hipótesis sobre el futuro de los mercados de trabajo agrícolas

Hemos visto que, hasta ahora, ciertos procesos agrícolas siguen siendo esencialmente manual porque se dispone de una mano de obra abundante, precarizada y con una gran movilidad o capacidad de circular. Cada una de estas tres características, son necesarias pero no suficientes para lograr la conformación de esta “masa” de trabajadores baratos, informales y desamparados. Sin embargo, su movilidad es una condición *sine qua non* para su inserción en la globalización. Sin ella, esta

población pierde su capacidad de insertarse en los mercados de trabajo globales, se vuelve una población “sobrante” como lo vemos en todas partes del sur global, pero en particular en África subsahariana. Es la estrecha combinación entre ellas la que permite el surgimiento de este nuevo tipo de trabajador asalariado. Se trata entonces de un proceso particular al actual modelo de acumulación a nivel global. También vemos que existen tecnologías para sustituir esta mano de obra, otras se pueden crear con cierta facilidad ya que una característica de la cuarta revolución tecnológica es el incremento de la porosidad en el uso de las nuevas tecnologías.⁴ Por eso planteamos que la adopción de una nueva tecnología no depende tanto de su eficacia propia sino de la disponibilidad de una “masa” adecuada de trabajadores. Hasta ahora, los trabajadores mismos, los empresarios agrícolas, así como los gobiernos y las cadenas agroindustriales, han logrado que se mantuviera el predominio del trabajo vivo sobre el trabajo muerto pero esta situación no está exenta de fuertes incertidumbres de orden económico, social, o político. Hoy, a estas hay que agregar la incertidumbre de orden sanitario, que puede ser la más compleja de resolver. Sobre esta base, planteamos que, si la incertidumbre crece en un nivel inaceptable para el capital global, las agroindustrias transnacionales impondrán a los productores agrícolas “insertados” a sus cadenas, pequeños como grandes, estas nuevas tecnologías. La amenaza de una pandemia incontrolable puede ser un poderoso factor de cambio tecnológico con efectos inmediatos en una fuerte disminución del empleo en los mercados de trabajo agrícolas.

Esta es la tendencia actual que sigue el capital internacional. El control de las cadenas de valor sobre la producción es omnipresente no porque hayan penetrado directamente en todos los rincones del planeta, sino porque sus efectos se extienden aún en las regiones aparentemente “excluidas” por la mundialización. Es omnipresente pero su implantación territorial es desigual y diferenciada según las ventajas comparativas de cada lugar. El dinamismo siempre creciente del cambio tecnológico nos hace pensar que esta tendencia puede fortalecerse repentinamente,

⁴ Recordemos notables antecedentes como la transformación de los tanques de guerra, inventados por el ejército nazi para la segunda guerra mundial, en modernos tractores una vez terminado el conflicto armado.

aunque, para eso, deberá resolver apremiantes problemas de sustentabilidad social y ecológica.

REFERENCIAS

- C. de Grammont, Hubert, 2019, préface du livre Travail, mobilités, subjectivités et formes d'assujettissement dans les Amériques, sous la direction d'Alexis Martig et Jorge Pantaleón, Presses de l'Université Laval, Canada, 344 p., pp.XI-XVII.
- Lara Flores, Sara María, 1998, Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana, Juan Pablos Editor-Procuraduría Agraria, 302 p.
- Nun, José, 1969, *Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal*, Revista Latinoamericana de Sociología, nº 2, pp. 178-236.
- Sánchez Gómez, Martha Judith y Francisco Torres, 2019a, *Los otros trabajadores agrícolas transnacionales: una red de injertadores mexicanos*, Migraciones, nº 46, pp. 5-33.
- Sánchez Gómez, Martha Judith y María Brignardello, 2019b, *Injertadores y globalización del vino, un estudio en Mendoza, Argentina*, Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, nº 4, pp. 24-52.

Desafíos de la movilidad en la ruralidad frente al COVID-19, Argentina¹

Mariela Blanco*

Cuando a principios del año en curso se desata la pandemia del COVID-19 la primera medida que se toma a nivel mundial es detener la movilidad. Esto impactó en la sociedad globalizada en donde la circulación de mercancías y el movimiento de personas constituyen procesos fundamentales para el sostenimiento de la economía. Una serie de medidas restrictivas afectan de diferente manera la expresión de la movilidad. Limitaciones parciales a la circulación (según sector de la actividad económica), confinamientos totales (según edad de la población y condición de salud), prohibiciones a las personas afectadas por el virus,

* Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), Argentina. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

¹ Esta presentación se basa en el informe “Trabajadores migrantes del agro en el contexto de la pandemia” Mariela Blanco, Melina Neiman, Germán Quaranta, Alejandra Santiago y Julián Wolpowicz de la *serie El trabajo en tiempos de COVID-19* CEIL-CONICET. <http://www.ceil-conicet.gov.ar/publicaciones/el-trabajo-en-los-tiempos-del-covid/> y en los resultados de investigación del proyecto *PIO CONICET UNSE* “Transformaciones sociales, trabajo y migración en hogares de campesinos y asalariados agrarios en la provincia de Santiago del Estero”. Se suma un número limitado de referencias bibliográficas con el sólo fin de servir de orientación a los intereses de los lectores.

etcétera; sin embargo, no se establecieron medidas específicas para la población migrante más allá de aquellas que contemplaban a la población en general.

En la Argentina, el pasado 20 de marzo se dictó la cuarentena obligatoria en virtud de la emergencia del COVID 19 con importantes restricciones a la movilidad reduciendo la circulación a una escala mínima. No obstante, en el Decreto 297/20 se establecen una serie de actividades esenciales habilitadas para continuar funcionando siendo la agricultura una de las actividades contempladas. De esta manera, el trabajo agrario se va a encontrar expuesto por este contexto restrictivo y particularmente el trabajo agrario migrante enfrentando una serie de desafíos propios de su condición.

Para entender cómo se ha visto afectada la actividad y el trabajo migrante en los lugares de destino a partir de la emergencia del COVID 19 es necesario considerar, por un lado, la necesidad que tienen este tipo de trabajadores de movilizarse para acceder a un trabajo y, por el otro, una larga historia de informalidad asociada a cómo se organiza el desplazamiento, las condiciones de vida en destino y las condiciones de trabajo en general. A su vez, la profundidad de los efectos que esto provoca sobre los trabajadores es necesario considerar la situación que éstos y sus familias enfrentan en los lugares de origen dada la tradicional vulnerabilidad de este segmento de la población.

En este trabajo se analizarán los principales cambios del trabajo agrario migrante de la población proveniente de la provincia de Santiago del Estero. Esta provincia históricamente ha contribuido con importantes volúmenes de trabajadores que se desplazan por el país para realizar distintas cosechas a lo largo del año (Forni, Benencia y Neiman: 1991). En la actualidad se hallan inscriptas 15.000 personas en el Registro Provincial de Trabajadores Rurales que se desplazan de forma temporal². Una

² En el marco de la Secretaria de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero se creó el Registro Provincial de Trabajadores Rurales con Empleo Transitorio (Decreto 110/2019), cuya función es empadronar a los trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad.

estimación general de la cantidad de migrantes temporarios santiagueños, se ubicaría en torno a los 25.000.

Los mercados de trabajo migrante

En los últimos años se han observado importantes transformaciones en la demanda de mano de obra migrante, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. La mecanización de las cosechas del algodón, del olivo, de la vid y de la caña de azúcar, así como también de las tareas de despanojado de las plantas de maíz para la producción de semillas híbridas, redujeron sustancialmente la demanda de la fuerza de trabajo aportada mayoritariamente por los trabajadores migrantes. Al mismo tiempo, el desarrollo de un incipiente mercado de trabajo local con mano de obra residente en las localidades urbanas, en algunos casos antiguos migrantes asentados, comienza a competir por los puestos con los trabajadores migrantes.

Desde una mirada cualitativa se pasó, en términos generales, de la clásica migración familiar a la migración de hombres en edades centrales de trabajo (Quaranta y Blanco: 2012; Quaranta: 2017). El avance en la legislación laboral y la presencia de fiscalizaciones en los lugares de destino contribuyeron en parte a la redefinición del perfil de estos trabajadores. Por su parte, los ciclos de la migración han tendido a acortarse por el mejoramiento de los medios de transporte y de comunicación, que permiten a las empresas flexibilizar la contratación de trabajadores en momentos puntuales y por lapsos más cortos (a veces un trabajador puede llegar a desplazarse hasta tres veces en una campaña), con el fin de mantener al máximo la productividad.

Asimismo, las estrategias de reclutamiento de las empresas se volvieron más heterogéneas, pudiendo incluir desde la figura clásica del contratista o cuadrillero encargado de llevar a los trabajadores hasta la contratación directa de trabajadores que se desplazan solos. Se destaca también las situaciones en donde las empresas envían personal propio para organizar las cuadrillas de trabajo y las pautas del viaje como también la

presencia en origen de empresas de servicios de contratación de trabajo (Blanco, Bardomás y Mingo: 2017).

Con respecto al alojamiento de los trabajadores en destino se identifican dos entornos: o bien los trabajadores son alojados dentro de la misma empresa en la que trabajan (con diferencias en las condiciones, construcciones específicas para tal fin o, instalación de carpas o adecuación de galpones como dormitorios); o bien los migrantes se alojan fuera de los establecimientos (Carrizo y Blanco: 2016). El alojamiento de los trabajadores fuera de los establecimientos fue motorizado en algunas ocasiones por las empresas como estrategia para evitar las inversiones requeridas para cumplir con las exigencias de la legislación laboral y para eludir además la fiscalización de las condiciones de hospedaje (Quaranta: 2014). Una forma de llevarlo a la práctica fue organizar las estancias en instalaciones muy similares a un galpón en una localidad cercana, o bien hacer que los trabajadores alquilaran casas, camas o dormitorios mientras dura la cosecha.

Finalmente, en cuanto a las condiciones de trabajo, las jornadas laborales son largas debido al predominio del sistema de pago a destajo o por productividad (por cantidad de cajones o tachos recolectados), con escaso uso de elementos de protección obligatorios y con condiciones precarias de acceso al agua y los servicios sanitarios. Este panorama se agudiza por la condición migrante del trabajador que, por lo general, no cuenta en el lugar de destino con vínculos sociales más fuertes a los que recurrir en caso de requerir ayuda frente a un imprevisto o de tener que solucionar algún aspecto clave de su existencia como, por ejemplo, problemas de salud, acceso a la alimentación, o la movilidad (Blanco y Carrizo: 2011).

Características de los trabajadores migrantes en origen

Los trabajadores agropecuarios de la provincia de Santiago del Estero en las últimas décadas experimentaron dos procesos de amplia relevancia. Primero, se produce un incremento de los trabajadores asalariados tanto absolutos como relativos que alcanzan casi 25.000 trabajadores y

representan casi 6 de cada 10 ocupados en el agro. Este aumento de la asalarización se da en paralelo a una caída significativa de la actividad predial de los hogares con residencia rural. Segundo, la residencia de los asalariados agrícolas tiende a urbanizarse ya que cerca de la mitad de estos trabajadores habitan en localidades urbanas (Quaranta: *en prensa*). Tendencia que en parte se explica por el avance del agronegocio y la disminución de los ingresos percibidos por la actividad agraria (Blanco y Neiman: 2017; Neiman y Blanco: 2020).

Aproximadamente la mitad de los asalariados agrícolas de la provincia migran en algún momento del año para desarrollar alguna ocupación agrícola. El tamaño promedio de los hogares de estos asalariados es 5,2 integrantes y resulta similar tanto para los ubicados en zonas rurales como para aquellos establecidos en áreas urbanas (Quaranta: 2016).

El perfil sociodemográfico de los trabajadores migrantes corresponde casi exclusivamente a hombres en edades centrales de trabajo: el 70% de los trabajadores migrantes tienen menos de 40 años. La posición en el hogar de estos es jefe de hogar en el 52,3% de los casos e hijos en el 36,1%.

Además, algo más de la mitad de los hogares tienen un único generador de ingresos laborales. Sin embargo, este comportamiento presenta diferencias según residencia de los trabajadores dado que la presencia de unidades domésticas con más de un generador de ingresos laborales aumenta en las zonas rurales.

Los trabajadores migrantes acceden a las ocupaciones a través de intermediarios como, por ejemplo, cuadrilleros o empresas de contratación de mano de obra, en casi 7 de cada 10 de los casos. Predomina el traslado en transporte público (42,7%) y en vehículos de las empresas (30,7%), en tanto que es mucho menor el traslado por cuenta del cuadrillero (16,6%) u otra modalidad (10%).

Estas familias combinan en sus estrategias de ingresos, aquellos originados en sus inserciones laborales con los provenientes de la protección social. La importancia de estos últimos se destaca al observar que 8 de

cada 10 hogares de asalariados agrícolas migrantes en Santiago del Estero dispone de algún ingreso proveniente de la protección social, fundamentalmente pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo. El último tipo de ingresos representa, en promedio, casi el 45% de los ingresos monetarios totales anuales de estos hogares.

Impacto del COVID-19 en los mercados de trabajo de destino

Los destinos de la migración de la mano de obra santiagueña se distribuyen en alrededor 12 cultivos con tiempos de cosecha diferentes a lo largo del año. En estos destinos hay diferencias en el volumen de contratación de trabajadores como también en las distancias que deben recorrer para realizar el trabajo. Cuando se decretó la cuarentena, los cultivos que se encontraban en la temporada de cosecha y a los que viaja mano de obra santiagueña eran: el olivo (en La Rioja, Catamarca, San Juan), la pera y manzana (Río Negro y Neuquén), la papa (Buenos Aires y Córdoba) y la desflorada de maíz (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). El olivo, el desflore y la papa constituyen mercados de trabajo centrales para estos trabajadores.

ACTIVIDAD	PERÍODO Y DESTINO											
	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.
1.1. Maíz. Despajonado. 1.2. Clasificación semilla.	Buenos Aires		Santa Fe, Córdoba, Salta				Clasificación semilla					
2. Arándano. Cosecha y empaque.	Entre Ríos											
3. Girasol.			Santa Fe, Buenos Aires									
4. Papa.						Buenos Aires, Córdoba						
5. Aceituna, uva, ajo.			La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza									
6. Cebolla y ajo.							Buenos Aires					
7. Limón.	Tucumán											Tucumán
8. Espárrago.												
9. Frutas de carozo.			Neuquén, Río Negro									
10. Cosecha de maní.												
11. Cosecha de poroto.												
12. Desmonte y destronque.			Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Chaco									

Fuentes: *Actividad y destino*: De Dios, 2006. Neiman, 2009. Origen: De Dios, 2006. Datos de la encuesta del estudio, 2010. RENATRE Santiago del Estero. Informantes varios.

Migración Alta
 Migración Media
 Migración Baja

En relación a las cosechas que se encontraban activas al momento de decretarse el aislamiento se presentan a continuación qué transformaciones debieron enfrentar los mercados y los trabajadores en tres dimensiones clave del trabajo migrante. Es importante señalar, tal como muestra el cuadro anterior que estos mercados se encontraban en distintos estados de avance de las cosechas, situación que va a afectar el modo y grado de adopción de medidas sanitarias y de circulación. En un primer momento las empresas adoptan los protocolos establecidos para la población en general y con el pasar de los días se comienzan a implementar protocolos específicos para cada actividad, que fueron definidos por las empresas, instituciones del sector e instituciones públicas con diferente alcance jurisdiccional.

En cuanto a la **organización del alojamiento** se establecieron una serie de medidas para evitar al máximo el contacto entre los trabajadores. Los lugares de dormitorios redujeron la cantidad de migrantes por cuarto, pero en todos los casos se mencionaron dificultades para sostener el distanciamiento en los lugares de uso común como los espacios para las comidas o recreación. Asimismo, en las cosechas que estaban comenzando, como el olivo y la papa, que se vieron impedidas de trasladar trabajadores desde otras provincias, incrementan la contratación de servicios de transporte para la mano de obra local, además que deben cumplir con las normativas de distanciamiento para el traslado. En estos casos, se buscó mantener a los trabajadores alojados en los predios, aunque fueran locales, para evitar los contagios y que la empresa se viera obligada a entrar en cuarentena. Distinto en el caso del desflore y la cosecha de fruta que ya estaba muy avanzada.

Algunas empresas proveyeron de elementos de protección y cuidado sanitario a los trabajadores mientras que otras no brindaron nada fundamentándose en que los trabajadores ya se encontraban trabajando en los establecimientos y no corrían riesgos de contagios porque no estaban en contacto con otras poblaciones.

La **organización del trabajo** si bien no ha sufrido grandes cambios en cuanto al desarrollo de las actividades porque las mismas tareas ya

tienen un distanciamiento por el trazado de los cultivos, se buscó reducir el tamaño de las cuadrillas y evitar el contacto con otros trabajadores de la empresa que no sean migrantes. Principalmente se prestó especial atención a la relación con los transportistas ya que se considera uno de los sectores más expuestos a la transmisión del virus por la condición de movilidad de su actividad.

Un punto que sí jugó un rol destacado fue la necesidad de suplir a los trabajadores migrantes con mano de obra local. En esta cuestión se detectaron situaciones novedosas. En primer lugar, los trabajadores que se habían trasladado para realizar una cosecha, por ejemplo, la de aceituna de mesa, al verse imposibilitados de regresar a sus hogares de origen optan por continuar trabajando en el mercado de cosecha de aceituna industrial. En segundo lugar, la necesidad de contratar trabajadores locales empujó a los intermediarios a reconvertir rápidamente sus estrategias de reclutamiento hacia el mercado local. Por último, algunos trabajadores migrantes establecidos que ya habían salido de la actividad agraria vuelven a ofrecerse como trabajadores de cosecha al verse interrumpido su circuito de trabajo laboral en otro sector. Esta situación se detectó en la cosecha de papa cuya zona limita con ciudades turísticas, las cuales se encontraban inhabilitadas para ofrecer estos servicios (hotelería, gastronomía, mantenimiento, limpieza, etc.).

La **gestión de la movilidad** reviste un entramado muy diverso ya que en la misma se articulan las situaciones del momento del ciclo de las cosechas, el regreso o salida de los trabajadores y el medio utilizado para el desplazamiento. A esto hay que sumar que en algunas situaciones el costo del desplazamiento forma parte de la negociación salarial. Es decir, las empresas se hacen cargo del pasaje siempre y cuando el trabajador cumpla con la estadía pautada. En el contexto del aislamiento estos acuerdos se vieron afectados al paralizarse la circulación de los medios de transporte.

Las cosechas que estaban finalizando colocaron a los migrantes en una situación de alta vulnerabilidad. Impedidos de regresar a sus hogares permanecieron largas jornadas en las estaciones de ómnibus esperando

que alguna de las jurisdicciones (de origen o de destino) habilitara el traslado. Para los trabajadores que se movilizaban por su cuenta el regreso se vio dificultado, ya que en primera instancia ellos mismos debían gestionar el retorno cuando los medios de transporte público se encontraron suspendidos, recuérdese que la mayoría se moviliza de esta manera. Por su parte, los trabajadores trasladados por las empresas dependían de que estas obtuvieran los permisos necesarios para circular e implementar el viaje de retorno.

En algunos casos, las provincias de destino despacharon vehículos con trabajadores hacia sus lugares de residencia, y en otros casos, Santiago del Estero organizó viajes para permitir la vuelta a sus hogares. El Estado se hizo cargo del costo de algunos de los viajes y coordinó el regreso de la mayoría de los trabajadores gestionando la autorización para la circulación de los vehículos. Posteriormente se demandó a las empresas, jurisdicciones locales e incluso a las familias la cobertura del pasaje. Esta circulación no estuvo libre de inconvenientes, a pesar de contar con las autorizaciones correspondientes, dado que en diferentes localidades se restringía la movilidad arbitrariamente por autoridades locales tanto provinciales como municipales. Los trabajadores a su regreso debieron realizar una cuarentena que, en un primer momento, fue en los domicilios particulares y, posteriormente, se empezó a llevar adelante en escuelas y en otras instalaciones públicas.

Finalmente, los trabajadores se deben enfrentar a distintas trabas para poder movilizarse y acceder a sus fuentes de trabajo, por ejemplo, en las cosechas del olivo, la papa o el limón. Frente a este escenario, Santiago del Estero y las provincias de recepción de trabajadores se encuentran discutiendo en el Consejo Federal del Trabajo mecanismos para permitir la circulación de los migrantes. De todas maneras, algunos trabajadores que buscan pasar a otras provincias se acercan a los límites jurisdiccionales y los cruzan de forma irregular.

Se está organizando la movilidad con las garantías de certificados de salud y permisos para circular de manera tal que se les permita el traslado e ingreso a las provincias de destino. Los desafíos a la movilidad de los

trabajadores se extenderán en los próximos meses y, de forma consecuente, el otorgamiento responsable de las autorizaciones para circular debe ser agilizado para favorecer el acceso al trabajo de esta población.

Desafíos de la movilidad

La irrupción de la pandemia a escala global ha impactado directamente sobre la movilidad desvelando que no sólo la circulación de mercancías sino también de las poblaciones se tornan en un componente estructural de las sociedades contemporáneas. De manera tal que al observar la movilidad observamos la estratificación social. El *quedate en casa* es imposible para los trabajadores migrantes que, como se mostró a lo largo de este trabajo, la opción por la migración en muchos casos es la única opción para el acceso a un trabajo. La movilidad en sí misma es un gran escollo que estos trabajadores deberán enfrentar en los próximos meses para acceder al trabajo y retornar a sus hogares.

Las diferentes escalas que atraviesa la movilidad macro y micro económico y social representan un desafío para las políticas. Al nivel de los hogares, si bien muchos han accedido de manera parcial a las compensaciones monetarias de la política social (bonos extraordinarios a las pensiones y a la Asignación Universal por Hijo) otros, cuyos miembros son registrados bajo la modalidad fija discontinua quedaron excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia. La adecuación de la actividad para cumplir con los protocolos para la prevención del contagio de la COVID 19 enfrenta a la política no sólo con los aspectos sanitarios de la movilidad, sino también con las condiciones de vida y trabajo que caracterizan a las ocupaciones realizadas por los trabajadores migrantes. La salud para el trabajo es una deuda pendiente de la política laboral.

Por último, ¿cómo se puede organizar una economía/ política de la movilidad de una manera más sostenible y equitativa? Pensando que el migrante no cambia de un momento a otro, pero su entorno sí, no sólo por la pandemia sino también por los cambios que se observan en la

movilidad en las condiciones de origen y en las condiciones de destino (mecanización y competencia con los mercados locales de trabajo).

REFERENCIAS

- Blanco, Mariela y Neiman, Melina (2017). Las dinámicas globales y las nuevas movi- lidades en el contexto de la expansión del cultivo de soja en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Relaciones Internacionales*, 36,1-22.
- Blanco, Mariela; Bardomás, Silvia y Mingo, Elena (2017) “Migrantes y trabajo: un estudio sobre los dispositivos sociales para acceder al trabajo en tres circuitos migratorios de la Argentina”, *Revista AGER de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural*, n° 22, pp. 35-60. DOI: 10.4422/ager.2016.07
- Blanco, Mariela y Carrizo, Lila (2013) “Es- trategias de ingresos en los hogares rurales migrantes santiagueños frente a la movi- lidad espacial”, *Revista Aportes Científicos para las Humanidades*, Universidad de Ca- tamarca, Argentina.
- Blanco, Mariela y Carrizo, Lila (2011) “Muta- ciones laborales: ida y vuelta. Condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores mi- grantes en Catamarca, Argentina”, *Revista Geográfica de América Central* v2 n° 47E, Escuela de Ciencias Geográficas - Universi- dad Nacional de Costa Rica, Costa Rica.
- Carrizo, Lila y Blanco, Mariela (2016) “Terri- torialidades cambiantes y conflictivas en el departamento Pomán. El olivo y los proce- sos migratorios desde la década de los no- venta”, en *Transformaciones territoriales y Políticas de Desarrollo Rural en la provincia de Catamarca Red RIESSA* compilador, San Fernando del Valle, Catamarca.
- Forni, Floreal; Benencia, Roberto y Neiman, Guillermo (1991), *Empleo, Estrategias de vida y Reproducción. Hogares Rurales en Santiago del Estero*, CEAL, Buenos Aires.
- Ledesma, Reinaldo; Paz, Jorge y Tasso, Al- berto. Trabajo rural estacional en Santiago del Estero, OIT. Programa CEA. Ministe- rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 2011.
- Neiman, Melina y Blanco, Mariela. Beyond the Pampas: Global capital and uneven de- velopment in Argentine soybean expan- sion. *Journal Agrarian Change*. 2020;1-24. <https://doi.org/10.1111/joac.12370>
- Quaranta, Germán (en prensa), “Población, hogares y ocupaciones rurales frente al cambio social. Santiago del Estero, Argen- tina”, *INTERDisciplinas*, Setiembre de 2021

Quaranta, Germán. “Estrategias laborales de vida y patrones migratorios de trabajadores agrícolas en hogares rurales de Santiago del Estero, Argentina” *Desarrollo Económico*, No. 221: 119-146, 2017.

Quaranta, Germán. “Nuevas realidades de trabajadores migrantes temporarios: el caso de los asalariados agrícolas de Santiago del Estero” *estudios migratorios latinoamericanos*, Año 30, No. 81: 295-317, 2016.

Quaranta, Germán (2014). “La conformación de un mercado de trabajo transitorio

migrante en un nuevo territorio productivo: el caso de la olivicultura, Pomán, Catamarca, Argentina”, en Pedreño Cánovas, Andrés (Coord.), *De cadenas, migrantes y jornaleros. Los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias*. Madrid: Talasa, pp. 78-93.

Quaranta, Germán y Blanco, Mariela (2011) “Formas actuales de circulación y conformación de patrones migratorios de hogares rurales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina” *RURIS*, Vol. 6 No. 1: 127-158.

Trabajadores agrícolas migrantes en México

Retos para su atención en el contexto de la pandemia de COVID-19¹

Adriana Saldaña Ramírez*

En México, el Gobierno Federal decretó el 30 de marzo de 2020 estado de emergencia sanitaria por COVID-19, con la consigna de la Secretaría de Salud de “Quédate en casa” y que, para contextos rurales e indígenas se tradujo en “Quédate en tu comunidad”, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El 31 de marzo, se establecieron los sectores esenciales de la economía que no podían parar durante la pandemia,

* Profesora – Investigadora de Tiempo Completo del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

¹ Este documento se basa parcialmente en la propuesta titulada “Prevenir, mitigar y monitorear la epidemia COVID-19 en personas jornaleras agrícolas migrantes y asentadas: una estrategia de comunicación intercultural”, presentada por un equipo de trabajo, en el que se encuentra la autora, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el mes de mayo de 2020.

entre los que se encontraba la agricultura. Casi un mes después, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó la “Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19”, que contiene recomendaciones prácticas para la planeación, la capacitación, la prevención, la protección y el monitoreo en los centros de trabajo agrícolas, que básicamente se dirige a empleadores de grandes empresas.² Ésta se realizó para proteger a los trabajadores agrícolas que no podían “quedarse en casa”, ni “quedarse en su comunidad”, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues debían salir de sus casas y pueblos para conseguir trabajo como todos los años, ya que su supervivencia depende del ingreso en regiones distantes. Este texto se centra en los trabajadores agrícolas que migran en el interior de México, dejando para otro momento a aquellos que se dirigen a laborar a Estados Unidos y Canadá, quienes a pesar de la pandemia, salieron del país.³

Principales características de los trabajadores agrícolas migrantes y sus condiciones laborales

Los trabajadores agrícolas migrantes es un grupo heterogéneo, de alta complejidad en su dinámica interna: muchos de ellos de regiones indígenas y de diferentes grupos étnicos con patrones de movilidad diferenciados por región y cultivo; aunque todos comparten precarias condiciones de trabajo, vivienda, traslado y de acceso a la salud. Así mismo, unos segmentos de estas poblaciones presentan comorbilidades que comprometen su sistema inmunológico, como diabetes, hipertensión y otras condiciones como discapacidad y embarazo.

En México existen diversas estimaciones sobre la cantidad de trabajadores agrícolas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas

² Ésta fue revisada por académicos especialistas en el tema jornaleros migrantes a petición de Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), como una manera incluir a la academia en acciones dirigidas a esta población durante la pandemia.

³ Durante la pandemia, mexicanos se dirigieron a laborar de manera legal a distintas regiones de países en el norte: a Estados Unidos, a través de las visas H2A, y a Canadá, por el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá (PTAT).

(ENJO) en 2009, éstos eran poco más de 2 millones⁴, de los cuales el 82% eran locales y el 18% migrantes. Estos últimos, en números absolutos, eran 372,015 personas, cifra que se incrementa a 892,089 si se toma en cuenta a sus familiares (SEDESOL, 2011). Otro documento de la Secretaría de Salud, de 2017, estimaba que los trabajadores agrícolas migrantes eran 1.2 millones (SSA, 2017). De acuerdo a la ENJO se sabe, además, que:

- Cuatro de cada diez jornaleros agrícolas migrantes eran indígenas.
- Cuatro de cada diez migraban a dos o más destinos laborales cada año.
- Seis de cada diez jornaleros se empleaban con grandes empresas agrícolas, concentradas en el noroeste del país y que destinan al menos la mitad de su producción a mercados externos.
- A su vez, cuatro de cada diez jornaleros se emplean con productores de escala pequeña o mediana.
- Los principales mercados de trabajo rural que son polo de atracción de jornaleros agrícolas migrantes son generados por los cultivos hortofrutícolas y caña de azúcar.

Con base en los registros de beneficiarios del Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI) de la STPS, en 2016 este programa apoyó a 79,490 trabajadores agrícolas migrantes, de los cuales el 85% se concentró en hortalizas y frutas, mientras que el resto en caña de azúcar⁵. Respecto a los empleados en los cultivos hortofrutícolas, más de la mitad laboró en estados del norte del país, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y

⁴ De acuerdo a la misma fuente, la población jornalera agrícola en el país, trabajadores y familiares sería de más de cinco millones (SEDESOL, 2011).

⁵ El Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI) pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el objetivo de vincular a trabajadores con empleadores. En el caso de los primeros, se trata personas subempleadas o desempleadas en sus lugares de origen que deben salir para conseguir trabajo en otro lugar. El SUMLI básicamente otorga apoyos económicos para que éstos puedan dirigirse hacia el lugar de trabajo y luego para su retorno. Los empleadores deben otorgar el traslado desde el embarque hacia el lugar de trabajo, así como un espacio que habitarán durante la temporada laboral. Los productores de escala pequeña y mediana, difícilmente pueden otorgar estas condiciones, por lo que el programa se decanta en los grandes empresarios agrícolas.

Baja California Sur, donde fueron empleados principalmente por grandes empresarios. Para una gran parte de estos trabajadores migrantes, conseguir empleo implicó el desplazamiento de largas distancias, mayores a los mil kilómetros (Saldaña, Sánchez y Lara, 2020).

Varias agrupaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal de México, World Vision, por solo mencionar algunas, expresaron su preocupación, pues los trabajadores agrícolas migrantes no podían permanecer en casa y sus condiciones laborales, de alojamiento y de traslado se caracterizan por la precariedad. Esto quiere decir: falta de contratos formales (contrataciones verbales) y de inscripción al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) que les brindaría atención médica y otras prestaciones sociales, viviendas deficientes sin servicios básicos, traslados en condiciones de hacinamiento, entre otros, que en el momento de la pandemia potencializan las posibilidades de que el COVID-19 afecte significativamente a esta población.

Las medidas de prevención, detección y atención a esta población, cuando las ha habido, han sido puestas en marcha en centros de trabajo de grandes empresarios, que, preocupados por la inocuidad y calidad de los productos, han implementado aún mayor control en la higiene de las instalaciones y de los propios trabajadores en campo y empacadoras. Algunas empresas señalaron que llevarían a cabo medidas para monitorear a sus trabajadores de campo al inicio de la temporada desde sus lugares de origen y luego al final, a su retorno. Por ejemplo, Driscoll's anunció en el foro "Protección social a la población jornalera en México", organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 29 de mayo, que la empresa realizaba campañas de difusión en las comunidades de origen, sobre las medidas de higiene que se implementaban en campo durante la temporada agrícola, a fin de evitar en estos lugares la discriminación

de trabajadores que tuvieron que salir en busca de empleo y luego regresaron una vez terminadas las tareas para las cuales fueron contratados.⁶

En los hechos, estas acciones anunciadas fueron puestas en marcha por muy pocas empresas y de manera acotada, lo que fue denunciado por organizaciones no gubernamentales, tales como Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que señaló en el foro “Jornaler@ Agrícolas en medio del COVID-19 ¿Cómo prevenir y atender a esta población vulnerable?”, organizado por la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal el 8 de julio, que los trabajadores de la Montaña de Guerrero estaban migrando sin ninguna protección o diagnóstico médico.

Por otro lado, están los trabajadores que se contratan con productores de pequeña y mediana escala y que se mueven “por su cuenta” sin ser enganchados desde sus lugares de origen, quienes han sido menos atendidos. De acuerdo a las estimaciones ya señaladas, cuatro de cada diez trabajadores agrícolas migrantes se contratan con este tipo de productores.

A continuación, se presenta brevemente el caso de los trabajadores en la uva de mesa, que laboran en el noroeste del país, en el estado de Sonora, que hemos monitoreado de manera más cercana con Sara M. Lara y Kim Sánchez en años recientes, particularmente en una investigación desarrollada entre 2012 y 2018 y de la que tenemos información indirecta en la coyuntura actual, a partir de notas periodísticas e informes de centros de investigación regionales.

6 En México, durante los primeros meses de la pandemia, comunidades rurales de diferentes regiones, cerraron sus entradas para evitar que personas ajenas arribaran y transmitieran el virus. Algunas, incluso anunciaron en sus páginas oficiales de Facebook, que cerrarían el paso a sus propios paisanos que hubieran salido a laborar a campos agrícolas distantes. Por ejemplo, algunas comunidades de la Montaña de Guerrero, región con fuerte expulsión de trabajadores agrícolas, cobraron multas a los jornaleros que retornaban y también los obligaban a mantener confinamiento en sus casas por 15 días. Ello debido a que los lugares de trabajo eran considerados zonas de riesgo de contagio.

Trabajadores agrícolas migrantes en las cosechas de uva de mesa

Sonora se ubica en el noroeste del país, es una entidad fronteriza con Estados Unidos, donde se concentra la producción de uva de mesa en más de 10,000 ha, en clima desértico, organizada por grandes empresas agrícolas que exportan su producción. Ahí arriban grupos de trabajadores agrícolas originarios de una veintena de entidades del sur del país, de pequeñas localidades rurales, para realizar tareas de poda, raleo y cosecha, en periodos cortos de tres semanas a un mes, en diciembre, febrero y mayo, respectivamente. Para la cosecha, la actividad que más demanda trabajadores, se estima que, entre mayo y junio, arriban alrededor de 20 a 25 mil jornaleros, generalmente hombres sin familia.

En su mayoría llegan a diferentes campamentos dentro de los campos en los que laboran y son enganchados desde sus lugares de origen a través de un complejo sistema de intermediación laboral. No obstante, alrededor de una tercera parte de estos trabajadores, arriba “por su cuenta”, es decir, llegan directamente atraídos por la oferta de trabajo y se asientan temporalmente en localidades de los alrededores, entre las que destaca Pesqueira.

Bajo la situación de emergencia sanitaria, si bien las empresas vitícolas anunciaron que tenían un plan de prevención y contención para controlar la afluencia de trabajadores migrantes que llegaron a los campamentos dentro de sus campos agrícolas, parecía que no consideraban a quienes arriban “por su cuenta” y se establecen fuera de éstos. Las localidades como Pesqueira, que reciben población temporal durante los meses de más demanda de las empresas vitícolas, tienen altos grados de marginación, con deficiencias en los servicios, que comprometen la salud de los habitantes y de los trabajadores migrantes.

No hay información precisa sobre cuál sido el impacto de COVID-19 en estos lugares, pues las autoridades no han dado un seguimiento específico a la población jornalera migrante, como fue señalado para la ONU-DH, por la Mtra. Margarita Nemecio, coordinadora general de la RNJJ y

Abel Barrera, director de Tlachinollan. No obstante, las organizaciones no gubernamentales han hecho registros puntuales en diferentes regiones agrícolas del país.⁷

Cabe señalar que en investigaciones que realizamos años atrás (Sánchez y Saldaña, 2015; Sánchez et. al. 2014) dimos cuenta que las empresas vitícolas suelen combinar la contratación de trabajadores, entre enganchados que llegan a sus campamentos, y los que lo hacen “por su cuenta” y se establecen en las localidades circundantes, a través de enganchadores y transportistas locales. No obstante, ambos grupos de trabajadores laboran sin contratación, sin ser inscritos a la seguridad social, incluso la mayoría de los entrevistados no sabían quiénes los empleaba, solo conocían a sus cuadrilleros y el nombre de los campos agrícolas. Se registró en las indagaciones en campo, que los trabajadores que vivían en los campamentos de las grandes empresas, lo hacían en condiciones de hacinamiento, trabajaban bajo altas temperaturas (alrededor de los cuarenta grados centígrados) y cuando enfermaban eran atendidos por los cuadrilleros, quienes trasladaban consigo medicamentos para atender a cualquier trabajador de deshidratación o mordida/piquete de fauna nociva; y que, en casos más graves, era el mismo cuadrillero, el que los trasladaba a los centros de salud cercanos. Esta vulnerabilidad y riesgos son problemas estructurales para la población de interés.

Retos en la atención de los trabajadores agrícolas migrantes en México

La pandemia de COVID- 19 debe ser una coyuntura que permita reconocer la labor de los trabajadores agrícolas, que pase por asegurar otras

⁷ Por ejemplo, el 3 de junio la muerte por insuficiencia respiratoria de un jornalero de 66 años de edad en el camión que lo llevaba de regreso de los campos agrícolas sinaloenses a su lugar de origen en la Montaña de Guerrero; o la muerte de una bebé de dos meses, hija de trabajadores en campos de chile en Aguascalientes, en el mes de agosto.

condiciones laborales. Entre las exigencias para ello, se encuentran demandas puntuales⁸:

1. Dar seguimiento a los trabajadores agrícolas migrantes, que permita acreditar antigüedad en el trabajo, para otorgarles atención médica y acceso a las prestaciones sociales (jubilación, vacaciones, reparto de utilidades). Hay conjuntos de trabajadores que se emplean durante todo el año, en periodos discontinuos, con diferentes empleadores en distintas regiones agrícolas, sin que se acumulen ni registren los periodos laborales. En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 279, señala que, para los trabajadores de campo eventuales y estacionales,⁹ los empleadores deben registrar la acumulación de las estacionalidades para establecer la antigüedad en el trabajo y calcular las prestaciones y derechos del tiempo sumado. Esto no se cumple en la práctica.
2. Atender el enfoque de la relación entre salud y trabajo, que permita implementar medidas de control y prevención en los espacios laborales, y que los productores asuman la responsabilidad de proporcionar los equipos de trabajo e información para reducir los riesgos.¹⁰
3. Establecer programas de acompañamiento a los trabajadores agrícolas. En México, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), fue desmantelado paulatinamente desde hace varios años y en 2019, desapareció. Éste, a pesar de su visión asistencialista,

⁸ La mayoría de estas demandas fueron redactadas en un trabajo de equipo, compuesto por Sara M. Lara, Kim Sánchez y la autora de este texto y fueron entregadas a las autoridades del SUMLI en 2017.

⁹ En el Capítulo VIII de la LFT, en el artículo 279 se especifica que el trabajador eventual es el que desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado; mientras que el estacional, es contratado para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, en determinadas épocas del año, para realizar actividades que van desde la preparación de la tierra hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, a cielo abierto, invernadero o de otra manera protegidos, que no afecten su estado natural, así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año.

¹⁰ El artículo 283 de la LFT, en las obligaciones de los patrones, en el numeral XIV señala que éstos deben impartir capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y protección.

permitía atender necesidades de guarderías, comedores, escuelas, capacitaciones en el trabajo, atención a la salud, entre otras.

4. Extender el Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI) para integrar a trabajadores que se emplean con productores de pequeña y mediana escala. El SUMLI es el único programa destinado a los trabajadores agrícolas migrantes en la actualidad, sin embargo, su objetivo se reduce a vincular jornaleros con empleadores, y que, por sus reglas de operación, apoya a los grandes empresarios en su abastecimiento de mano de obra.
5. Vincular al SUMLI con otras áreas dentro de la STPS, que verifiquen las condiciones otorgadas por los empleadores, en cuanto al trabajo, al alojamiento y al traslado, que permitan sancionar a aquellos que no cumplan ciertas condiciones para los trabajadores. En los últimos años, el SUMLI ha apoyado de manera significativa a las empresas productoras de uva de mesa y a pesar de ello, las precarias condiciones laborales persisten.
6. Involucrar a las autoridades locales (lugares de salida y llegada) de estos trabajadores, para asegurar traslados seguros y la vigilancia de las condiciones en las que se encuentran durante la temporada agrícola.
7. Finalmente, generar bases de datos homogéneas que permitan contar con información de esta población, pues hay distintas estimaciones generadas por diferentes instituciones, que no siempre coinciden entre ellas ni en los rubros que son registrados.

Estas exigencias se presentaban antes de la pandemia, pero en el contexto del COVID-19 deben ser atendidas, en la necesidad de que se cumplan los derechos humanos y laborales de estos trabajadores, recién descubiertos, como esenciales.

BIBLIOGRAFÍA

- Saldaña, Adriana, Sánchez, Kim y Lara, Sara M. (2020). Diferencias y semejanzas entre trabajadores temporarios en zonas hortofrutícolas y campos cañeros en México. *Ra Ximhai* 16 (1), 23 – 45: 10.35197/rx16.01.2020.01.as
- Sánchez, Kim y Saldaña, Adriana (2015). 'Vámonos a Sonora': ejército (agro) industrial de reserva en Puebla y Morelos para la uva de mesa. En Kim Sánchez (coord.), *Diversidad cultural, territorios en disputa y procesos de subordinación. Reflexiones desde la antropología* (pp. 113 -142). México: UAEM.
- Sánchez, Kim, Saldaña, Adriana y Lara, Sara María (2018). ¿Dónde comienza la (in)sostenibilidad social de un enclave agrícola de producción de uva de mesa en Sonora, México? *AGER, Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural* (24), 95 – 121. doi: 10.4422/ager2018.06
- Secretaría de Desarrollo Social (2011). *Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)*. Recuperado de http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/notas/N_PAJA_2011.pdf
- Secretaría de Salud (2017). *Guía para la validación de albergues agrícolas. Promotores de la salud*. Recuperado de http://dgps.ecolls.com.mx/Descargas/Salud_Migrante/Guia_Validacion__Albergues_Migrantes__nov_2017.pdf

Asalariados rurales en escenario de post-pandemia en Uruguay¹

Alberto Riella*

En este conversatorio intentaré hacer unas breves reflexiones sobre los asalariados rurales en un escenario de post-pandemia en Uruguay, tratando de pensar un poco más allá de la coyuntura actual y ver posibles tendencias para el trabajo rural y especialmente para aquellos que están ocupados como asalariados. La experiencia pandémica en el caso de Uruguay ha afectado muy poco la salud de la población, pero se han tomado medidas importantes ante la emergencia sanitaria como se ha hecho en los otros países de la región². Por ello, nuestro análisis estará

* Departamento de Sociología. Facultad de Ciencia Sociales. Universidad de la República. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

¹ Elaborado a partir de la desgrabación de la exposición realizada en el Conversatorio “El trabajo rural y la movilidad frente a los desafíos de la post pandemia”.

² Como ya se ha dicho en otros análisis al respecto, además de los aspectos demográficos y la baja densidad de población en las ciudades, se identifican al menos cinco temas que hacen a que la pandemia esté razonablemente controlada. La acción comunitaria, las decisiones políticas y la fortaleza del Estado construidas por los gobiernos anteriores en áreas estratégicas para esta emergencia. Primero, la rápida concientización de la mayoría de la población de la necesidad de aislamiento social voluntario y seguir protocolos para los casos donde no se podía garantizar el distanciamiento social. La segunda, la suspensión inmediata de todos los servicios públicos y aglomeraciones. La tercera, un sistema de salud integrado y de investigación científica que dio capacidad de respuesta y efectivamente pudo demostrar sus fortalezas. La cuarta, la alta cobertura de internet, su buena conectividad y precios accesibles, lo que facilitó mucho mantener el aislamiento social, suplir

centrado en un país que tiene hoy la característica de tener una baja incidencia del coronavirus, lo que permite observar algunas particularidades que en otros lugares no se ven con tanta nitidez para pensar posibles escenarios sin emergencias sanitarias.

La idea central para explorar un escenario post-pandémico en el Uruguay es analizar cómo se está procesando actualmente la gestión de la misma y cuáles están siendo sus consecuencias. En este sentido, a pesar de algunas especulaciones “optimistas” que ven en esta crisis una oportunidad para transformaciones menos “destructivas” del capitalismo y de su organización del trabajo, en el caso uruguayo, por ahora, se aprecia una profundización de las tendencias negativas de la crisis con un marcado aumento en la desigualdad social. Por esta razón, el escenario de post-pandemia, a nuestro juicio, va a tender a aumentar las brechas de inequidad en el país, y los trabajadores agrícolas y sus hogares verán aumentar su vulnerabilidad social.

Pero los efectos que estamos observando en la profundización de la vulnerabilidad en los hogares rurales y agrícolas, no necesariamente tienen que ver con el efecto en su salud o con sus riesgos de enfermedad. A nuestro juicio, la vulnerabilidad tiene que ver con la gestión política y económica de la pandemia para sostener “la salud pública”, y con la determinación de cómo y quiénes están pagando los costos que ello implica. En tanto cada país tiene sus particularidades, la pandemia se desarrolló de manera distinta en cada uno de ellos, y para entender lo que viene después de la misma tenemos que hacer un análisis de cómo cada sociedad la procesó, cómo la gestionó política y económicamente, y cómo se han distribuido los daños en los distintos estratos sociales.

Otra peculiaridad muy relevante para el caso uruguayo, es que el escenario post-pandemia se dará de manera concomitante o yuxtapuesta con la gestión de un nuevo gobierno que representa un giro importante en la concepción del Estado y de las formas de regulación de la economía. Si

servicios presenciales y dio una importante ayuda al sistema sanitario y educativo. El quinto elemento es la existencia de una red estatal de protección social (MIDES) muy densa y territorializada que ayudó a mitigar la situación de los más débiles.

bien estos dos elementos son analíticamente separables, fácticamente no pueden ser fácilmente distinguibles para un análisis prospectivo, ya que sus efectos se observarán de manera entrelazada e indiferenciables fácticamente en muchos casos. Entonces, se puede afirmar que nuestro país tendrá un escenario de post-pandemia generado por los efectos que produjo el enlentecimiento del proceso de acumulación y las restricciones para la vida social, pero estos van a estar asociados a una gestión de gobierno que representa una matriz político-ideológico diferente a la que generó fortalezas institucionales para la gestión de la pandemia. Por tanto, un escenario de post-pandemia desde esta perspectiva muestra, probablemente, que la conjunción de estos factores pueden producir una profundización a mediano plazo de la vulnerabilidad de los trabajadores rurales y sus hogares. Más allá de que en el corto plazo se pueda encontrar una solución sanitaria –mediante tratamientos o vacunas–, lo que puede producir una breve “euforia”, recuperación del consumo y otorgar un empuje temporal a la acumulación capitalista post-pandemia, es difícil que se logre mitigar las tendencias a mediano plazo que afectarán a los sectores sociales más vulnerables.

Respecto al agro uruguayo, se constata que el sector primario casi no ha tenido impactos económicos negativos, las cadenas agroalimentarias y la producción agropecuaria nunca detuvieron sus actividades y todas las zafras del sector se desarrollaron con normalidad. La baja circulación del virus en el país y la instalación de protocolos sanitarios en algunos lugares de concentración de asalariados en las zafras, llevó a que no hubiera ningún brote significativo entre trabajadores rurales y agrarios. Por tanto, la pandemia, por ahora, no generó efectos en la salud de los pobladores del mundo rural y los asalariados agrarios. Esto ha sido reconocido por las autoridades ya que en el marco de las medidas de la emergencia sanitaria los centros de enseñanza de estas zonas fueron los primeros en volver a la normalidad, luego de una corta interrupción de solo cinco semanas.

Ante esta situación, en el país no se dio una visibilización del trabajo agrícola como pasó en otros países en donde se ha declarado a estos trabajadores como esenciales. Solo aparecieron en la prensa algunas

noticias breves de movilidad de asalariados que son usuales, pero no eran tematizadas por los medios, como el caso de la migración de brasileños que vienen a trabajar en el Uruguay en algunas zafras (caña de azúcar y arroz) y que en estas circunstancias la prensa los presentó como un “riesgo” y “peligro” de contagio. Otro caso con mayor notoriedad, fue el flujo migratorio de trabajadores de la esquila que fueron contratados y trasladados en un vuelo “chárter” por contratistas para trabajar en la zafra en España. Estos fueron los pocos episodios de visualización del trabajo rural, donde se puso el acento en presentarlos como un peligro potencial para la salud pública, pero sin prestar atención al riesgo social al que están sujetos estos trabajadores año tras año dada su vulnerabilidad laboral.

Frente a la crisis que dejará la pandemia por varios años, los asalariados agrarios y sus hogares están expuestos a tener un mayor riesgo de exclusión social y pobreza extrema, dada la evolución que están teniendo de los factores que determinan su vulnerabilidad. El primero refiere al mercado laboral, su institucionalidad y los problemas en la calidad que presenta el trabajo rural. El segundo factor está vinculado a los alcances y la eficacia de las redes de protección social para atacar las nuevas vulnerabilidades que enfrentan los hogares que viven en el medio rural o que dependen de ingresos agropecuarios.

Dentro del primer factor, tenemos los efectos vinculados a la crisis de acumulación y al proceso de excedente de mano de obra que viene a agravar la tendencia a la pérdida de puestos de trabajo en el sector. En la última década se perdieron más de veinte mil empleos, que representan casi un 15% del total agrario. En estas circunstancias, el mercado de empleo muestra un aumento del desempleo y una baja en los niveles salariales, sobre todo de las tareas poco calificadas. Estas tendencias ya se observaban desde el 2015, pero que a raíz de la actual situación económica se profundiza su deterioro y la recuperación del salario real operada entre 2005 -2014 se va a ver muy comprometida en el futuro. Esto da como resultado una reducción de los ingresos de los hogares que presumiblemente vaya a continuar en los próximos años.

Por otra parte, también es esperable que haya una destrucción importante del trabajo no agrícola en zonas rurales vinculado al sector de comercio y servicios por la reducción del consumo e inversiones en estos territorios. Por tanto, los hogares de asalariados rurales que combinaban trabajo agrario con trabajo no agrario, van a ver afectado su ciclo de empleo y sus ingresos.

Un segundo componente de este factor es la agudización de las tendencias a la fragilización de las condiciones de trabajo, marcadas por el aumento en la transitoriedad de las tareas, la profundización de la flexibilización de los puestos de trabajo, la mayor tercerización y el incremento de la movilidad de los trabajadores. Estos procesos ya estaban en marcha, pero pensamos que en las nuevas circunstancias post pandémicas, se van a profundizar por la debilidad adicional que adquiriría la acción sindical. Estos factores pueden traer consigo también un aumento de la informalidad del trabajo rural, que en Uruguay era relativamente bajo para el resto de América Latina, pero que últimamente registra incrementos, sobre todo en los segmentos marcados por la transitoriedad y la tercerización.

Otro componente que está operando en el mercado de empleo rural, de carácter más institucional, es el comienzo de una lenta reducción de los derechos adquiridos por los trabajadores. Por un lado, se ha disminuido los márgenes para la acción sindical en algunas empresas que contaban con delegados sindicales, mientras que en otros casos extremos, se han llegado a usar los golpes por parte de los mandos medios para hacer cumplir órdenes a los trabajadores dentro de las empresas. Vivimos en estos meses algunos eventos, que todavía son muy aislados, pero que expresan de alguna manera cómo se usa la violencia física para reprimir acciones de desobediencia en el ámbito laboral y se busca un disciplinamiento coercitivo de los asalariados. También ha emergido una acción más colectiva de las patronales para disminuir, desestimular o cooptar, los ya pocos focos de sindicalización del sector. Por ejemplo, en estos meses se constituyó, de alguna forma, un nuevo nucleamiento de trabajadores rurales, que puede llegar a disputar la legitimidad a la ya existente, que fue la que ha representado en la última década a los

asalariados en todas las instancias gubernativas y legislativas, y con la cual los empresarios rurales nunca quisieron firmar acuerdos tripartitos.

Si bien en el sector agrario y rural la movilización de los grupos subalternos siempre fue muy débil, ahora tenemos, en este marco, un proceso claramente de desmovilización. Esto está llevando a un proceso importante de invisibilización de los asalariados agrarios, que va a redundar -junto con las presiones del mercado laboral-, en un retroceso en los avances que se habían logrado en las regulaciones de los mercados de trabajo rurales en Uruguay en la década anterior.

El segundo factor general que está vinculado al posible aumento en la vulnerabilidad de los hogares rurales es la reducción de las políticas públicas y políticas sociales. En conjunto conforma un complejo entramado de protección social para los mismos que va desde las transferencias directas y las pensiones, al sistema de cuidados, prestaciones de salud y de educación entre otras. Los hogares rurales y agrarios son beneficiarios de varios de estos programas que con sus acciones sostenidas a lo largo de los años contribuyeron a una reducción significativa de la pobreza rural del país. Pero en las actuales circunstancias, se ha anunciado que en los próximos años se producirá una reducción o reorientación de dichas políticas lo que puede afectar mucho a los hogares que fueron o actualmente son beneficiarios de las mismas. De hecho, los últimos informes de la CEPAL indican que Uruguay es el país que menos gasto social ha hecho en la pandemia, y está planificado que varias de esas transferencias, una vez pasada la emergencia sanitaria, se eliminen o se congelen.

En este escenario, podemos observar que están dadas las condiciones para que efectivamente se eleven los niveles de vulnerabilidad laboral y social de los trabajadores rurales y sus familias. No hay indicios que permitan pensar que estas condiciones puedan ser revertidas en el mediano plazo. Por tanto, dentro de este sector de trabajadores que van a ver aumentada su vulnerabilidad social y laboral, el grupo de los asalariados transitorios son los que más rápido se verán afectados con el riesgo de sufrir exclusión y pobreza extrema de forma acelerada en el corto plazo.

Claro que este es un escenario no deseado, pero objetivamente es el más plausible para la post-pandemia en Uruguay. Su emergencia se da por la contingencia que une la pandemia con el cambio de gobierno. La crisis económica ha potenciado los discursos más desregularizadores, anti-público y anti-estatal, todos ellos fundamentados en la “doctrina de shock”, pero ahora apelando al “shock pandémico”. Esta estrategia está dando sus resultados para los sectores dominantes ya que el gobierno plantea que la forma de superar esta “crisis” es a través de la fuerza empresarial. Son ellos los que nos van a devolver la prosperidad, por tanto, no podemos pedirles más esfuerzo. En cambio, se propone como legítimo bajar el salario de los trabajadores para salir de la crisis y se convoca a la central sindical para discutir el porcentaje de reducción de las remuneraciones privadas y públicas para los próximos dos años.

En síntesis, los logros que venían alcanzando los asalariados rurales en las últimas décadas en salarios, regulación del mercado de empleo y políticas sociales y públicas, muestran que fueron avances frágiles, pero que en las condiciones actuales pueden ser aún más fragilizados. En estas circunstancias tan adversas para este grupo social, también pueden surgir oportunidades para activar la acción colectiva y acumular fuerzas en defensa de los derechos conquistados y su ampliación a los sectores más vulnerables.

De la protesta social a la desregulación del mercado de trabajo rural en Ecuador en la coyuntura del COVID-19

Luciano Martínez Valle*

Introducción

En este corto ensayo, se analiza en forma coyuntural, los efectos de la reciente crisis económica que aunada a las medidas fondomonetaristas implementadas en marzo de 2019, desencadenaron una importante protesta social liderada por el movimiento indígena (CONAIE). El incremento de las desigualdades sociales es un corolario estructural que se basa no solo en la crisis económica por la que atraviesa el país, sino también en la desregulación del mercado laboral y en los efectos del COVID-19 en el medio rural.

* Profesor- investigador de FLACSO-Ecuador. Director de la Revista EUTOPIA. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

En un país pequeño y altamente dependiente de las exportaciones como el Ecuador, la caída del precio del petróleo a principios de 2019¹ evidenció la situación de crisis económica frente a la cual el gobierno de turno no se planteó ninguna otra opción sino el tradicional endeudamiento con la banca internacional y la aplicación de las medidas del FMI. Como contraparte del préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI en marzo de 2019, el gobierno se comprometió a implementar medidas económicas de alto costo social: eliminación del subsidio a los combustibles, flexibilización laboral, reducción del tamaño del estado y de la inversión pública, privatización de las empresas públicas, pago de la deuda externa, reforma fiscal favorable a los empresarios, entre otras.

Uno de los efectos más notorios de las políticas públicas regresivas ha sido el incremento de las desigualdades sociales, al contrario de ciertos planteamientos de los organismos multilaterales que opinaban que más bien habrían disminuido (desde una perspectiva “neoliberal”) en América Latina en la primera década del presente siglo (Pérez Sainz, 2016). Así, el índice de Gini de la desigualdad de la riqueza en el país en 2019 llegó a 0.759 y muestra una tendencia creciente en los últimos diez años². En el país, no solo existe un proceso de concentración de la riqueza sino también del poder en manos de pequeños grupos empresariales, apuntalado por las políticas públicas que ahora se las practica abiertamente, tal como lo menciona Bourdieu (1999) con la “mano derecha del Estado”.

Los efectos de estas medidas no se hicieron esperar y la chispa que encendió el fuego fue sin dudas el alza del precio de los combustibles en octubre de 2019, que desencadenó una protesta social no esperada por el grado de participación de los sectores populares urbanos y rurales y la violenta represión por parte del Estado.

¹ El precio del petróleo que en junio de 2019 se cotizaba en 105 dólares por barril, cayó en marzo del 2020 a 18 dólares por barril.

² Según datos elaborados por el Credit Suisse Global Wealth Databook (Báez, 2020).

Una protesta social con características novedosas.

Ya se ha escrito bastante sobre la protesta social de octubre del 2019 en Ecuador, como para repetir los argumentos centrales que la caracterizaron (Parodi y Sticotti, 2020; Ramírez Gallegos, 2020). Aquí, interesa resaltar los rasgos novedosos de esta protesta que inducen a reflexionar sobre las transformaciones ocurridas en el espacio y sociedad rural.

Si bien, el paro de octubre, motivado por el alza de los combustibles (decreto 883) movilizó al gremio de los transportistas que rápidamente llegó a un acuerdo con el gobierno, no obstante, abrió una brecha social por la cual se canalizó el descontento de sectores populares y especialmente del sector indígena bajo la dirección de la CONAIE. Pero como muy bien lo destacan varios analistas, no se trataba del mismo movimiento indígena que lideró los levantamientos de 1990 (Coronel, 2020; Ortiz, 2020).

Un elemento central y poco analizado en las explicaciones de la participación masiva de sectores indígenas y campesinos en el paro de octubre 2019, es que la sociedad rural se había modificado por el avance de las relaciones mercantiles que habían transformando las relaciones sociales, la cultura y las prácticas cotidianas de las familias, pueblos y comunidades tanto de la Sierra, Costa y Amazonía. En cierto sentido, esta modificación tiene relación con el proyecto populista-modernizador del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que, si bien no impulsó procesos de cambios estructurales como la reforma agraria, no obstante, generó las condiciones para que el capitalismo se expanda e imponga la lógica de acumulación en el campo. Entre esas condiciones, vale pena mencionar dos: la primera, la ampliación de las vías de comunicación que facilitó una rápida conexión entre las regiones del país, entre el campo y la ciudad, en otras palabras, la consolidación del mercado interno en el país; la segunda, el avance en la educación no solo básica sino también secundaria que se amplió incluso al medio rural y que facilitó tanto la reproducción del capital en la esfera del trabajo (trabajadores más capacitados) como en el ámbito doméstico y la vida privada a través de la absorción de nuevos valores (influencia de los medios de comunicación

y redes sociales) y nuevos comportamientos en la sociedad de consumo (Bauman, 2003).

La participación de los indígenas en octubre 2019 mostraba, además, el surgimiento de nuevos líderes, más preparados y con un discurso que reflejaba los cambios que se habían producido en el medio rural. No hay que olvidar que el gobierno de Lenin Moreno en los primeros diálogos con los indígenas planteó ofertas centradas en medidas de desarrollo rural tradicional (créditos, centros de acopio, ferias populares, etc.) que no fueron aceptadas por los líderes indígenas (Ortiz Crespo, 2020). Los nuevos líderes tenían una visión más acorde con los problemas actuales de la sociedad rural. Así por ejemplo, Leonidas Iza (dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, MIC) y uno de los líderes más importantes de la protesta, en varias entrevistas a la prensa y a la televisión, planteaba la necesidad de ampliar la visión de la CONAIE que vaya más allá de lo estrictamente étnico e incorporar las demandas de sectores populares de la ciudad, pues muchos de ellos tienen un origen indígena³. En realidad, el incremento del precio de la gasolina, también afectaba a la economía de los hogares rurales sean indígenas o no, plenamente inmersos en la economía mercantil. No solo afectaba a quienes tenían tractor, sino también camionetas para sacar los productos a la ciudad, al transporte para movilizar los niños a las escuelas, a los jóvenes asalariados que cada vez más utilizan motocicletas para movilizarse a los lugares de trabajo, etc.

Se puede concluir que uno de los efectos novedosos de esta protesta social fue la construcción de un espacio de resistencia popular (Scott, 2004) con la participación de la CONAIE, pero en gran sintonía con los trabajadores y sectores populares urbanos y no centrado únicamente en las demandas étnicas.

³ Entrevista a Leonidas Iza, Canal Telesur, 20 de octubre de 2019.

Los efectos de la pandemia en el medio rural y la flexibilización del mercado laboral

Como es conocido, la pandemia originada por el Covid-19 es un fenómeno principalmente urbano y afecta principalmente a las grandes urbes a nivel mundial. En el Ecuador también está concentrado en las ciudades más grandes y pobladas del país como Guayaquil y Quito y pierde intensidad en las ciudades medianas, pequeñas y en los pueblos y población rural dispersa. Afecta principalmente los espacios populares urbanos de las grandes ciudades que carecen de vivienda digna, de servicios básicos y especialmente de servicios de salud.

El Covid-19 no afectó en sus inicios a salud de la población rural y de los productores campesinos, pero si incidió en el flujo de mercancías campo-ciudad, en especial mientras duró el confinamiento. No obstante, en la medida en que poco a poco se abrieron las vías de comunicación, el comercio de productos agrícolas recobró su dinamismo, abasteciendo la demanda urbana y reactivando la agricultura para el mercado interno. En este sentido, el caso ecuatoriano es diferente de los otros países de la región, pues como es un país pequeño (256.370 km²), con una alta proximidad geográfica campo-ciudad y dispone de buenas vías de comunicación, la pandemia no inmovilizó la agricultura familiar tal como sucedió en los países más grandes de la región debido principalmente a la dificultad de movilizar los alimentos hacia las ciudades (IICA, 2020).⁴

En cambio, el sector más afectado por el COVID-19, fue el de los agronegocios y de la producción de commodities para la exportación. La reducción drástica del mercado de los países de mayor demanda de estos productos (Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) debido a la disminución del consumo de productos no esenciales, afectó a los agronegocios de flores ubicados mayormente en la sierra ecuatoriana. Según los datos

⁴ De hecho, aún antes de que se abrieran las vías de comunicación, existieron interesantes iniciativas de trueque entre productos de la costa y de la sierra, promovidas por organizaciones campesinas regionales (Arana, 2020)

de EXPOFLORES (2020), el sector florícola experimentó una pérdida del 70 % de las ventas al inicio de la pandemia.⁵

Ahora bien, esto generó una situación de pánico en el sector florícola y la búsqueda de alternativas centradas en la flexibilización laboral. Los representantes de las organizaciones empresariales de este sector, no dudaron en manifestarse abiertamente sobre la necesidad de aplicar dos causales existentes en el Código de Trabajo para despedir a los trabajadores sin indemnización: “por fuerza mayor y causa fortuita”⁶. La crisis económica que se agudizó en el 2020 mostraba sus efectos en el incremento del desempleo a nivel nacional y rural.

Gráfico 1 – Evolución del empleo rural por componentes



Fuente: INEC. ENEMDU telefónica, mayo-junio,2020

⁵ Las exportaciones para el primer trimestre de 2019 fueron de 84 mil toneladas, con un total de 492 millones de dólares, para el mismo período del 2020, las exportaciones cayeron a 14 mil toneladas con un ingreso de 61 millones de dólares. (EXPOFLORES, 2020)

⁶ Numeral 6 del artículo 179 del Código de Trabajo de Ecuador

La disminución del empleo adecuado y el incremento del subempleo, indican los efectos económicos tanto de la crisis económica como de la pandemia, que recayeron especialmente sobre los asalariados rurales, con el agravante de que muy difícilmente van a poder encontrar otro empleo similar o parecido en el mismo medio rural.

Ya desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo del 2020, los empresarios empezaron a despedir trabajadores sin ninguna indemnización en varias cantones de la sierra (Cayambe, Tabacundo, Latacunga) donde se ubican las florícolas, utilizando el argumento de “caso fortuito o fuerza mayor”.⁷ Con los trabajadores jóvenes, en cambio, se llegaban a acuerdos para disminuir tanto los días de trabajo como el horario así como el monto del salario. En los hechos, los empresarios ya estaban flexibilizando el mercado laboral a su antojo aún antes de que existiera un marco legal que lo permitiera.

Las presiones que ejercieron las Cámaras y organizaciones de empresarios en plena coyuntura de la pandemia, sobre el gobierno de Moreno, se concretaron cuando se expidió la Ley de Apoyo Humanitario COVID-19 y de ordenamiento de las Finanzas Públicas en junio del 2020.⁸ En realidad, se trata de una ley que consagra la flexibilización total del mercado de trabajo, por la cual el Estado deja de garantizar los derechos, ingresos y estabilidad laboral que constaban en el Código de Trabajo. Los principales aspectos de esta Ley en relación con el mercado laboral son los siguientes:

- reducción de la jornada laboral de hasta un 50 % por un año, renovable por un año más

⁷ No existen cifras actualizadas sobre el total de trabajadores despedidos en el año 2020. Pero varias denuncias presentadas a la Asamblea Nacional, indican, por ejemplo, que entre 2000 a 2500 trabajadores cerca de jubilarse, de la tercera edad, en estado de gestación y con discapacidad, habrían sido despedidos en el cantón Tabacundo. Igualmente, en el mes de marzo, se despidieron a muchos trabajadores en tres empresas grandes ubicadas en Cayambe: ARBUSTA; AGRITAB y FLORICAMPO (Indymedia, 2020). <http://ecuador.indymedia.org/?p=1888>

⁸ Publicada en el Registro Oficial del 22 de junio del 2020.

- El salario se paga en función de las horas trabajadas, pudiendo reducirse hasta llegar al 55 % del monto fijado antes de la reducción de la jornada.
- La relación laboral se termina sin lugar a indemnización (por caso fortuito o fuerza mayor)

La desregulación del mercado de trabajo, es otra de las medidas del actual gobierno tendiente a favorecer los intereses de los empresarios, sin considerar los impactos que acarrea no solo en las familias de los trabajadores rurales sino también en los territorios donde se ubican los agronegocios. Así, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de flores y brócoli sobre los cuales se han realizado algunas investigaciones (Martínez Valle, 2015; Martínez Valle, 2017), los impactos de la flexibilización laboral recaerán no solo sobre las familias de los asalariados rurales, sino también sobre familias campesinas de comunidades indígenas que venden su fuerza de trabajo excedentaria en forma ocasional (Fransoi, 2020). Para estas familias, la pérdida de trabajo o la disminución de los ingresos, implicará una disminución del nivel de vida, pues el ingreso salarial es el componente más importante de su reproducción social.

Como los trabajadores jóvenes de los territorios donde funcionan los agronegocios de flores y brócoli, provienen de familias sin tierra o altamente minifundistas, no podrán refugiarse en la agricultura familiar al no disponer de suficiente tierra y, por lo mismo, incrementarán el ejército de desempleados o subempleados a nivel rural. Tampoco tienen mucha opción de optar por la migración a las ciudades, estrategia que utilizaron anteriores generaciones, pues las posibilidades de encontrar empleo en las urbes son limitadas, dada la crisis económica y el alto nivel de desempleo urbano. Pero, además, corren el serio riesgo de contaminarse con el COVID-19 en los barrios populares densamente poblados, donde es más alta la incidencia de esta pandemia⁹.

⁹ En Quito, por ejemplo, la pandemia tiene la más alta incidencia en las parroquias La Magdalena, Cotocollao, Chillogallo, Centro Histórico y Chimbacalle. El Comercio, 26 de septiembre, 2020.

Mencionemos de paso, que estos trabajadores carecen de niveles mínimos de organización sindical que les permita resistir en el plano laboral la arremetida empresarial y desreguladora del Estado. La presencia de relaciones clientelares en la relación trabajo-capital, la oposición-represión de los empresarios frente a la formación de sindicatos, la falta de apoyo del Estado y la difusión de formas organizativas de corte empresarial como los Comités de Empresa, conforman un cúmulo de factores que inciden negativamente en la densidad organizacional de los trabajadores (Martínez Valle, 2019) Para los asalariados rurales más que la pandemia, es la desregulación del mercado de trabajo el verdadero problema por el que atraviesan actualmente.

A manera de conclusión

En este corto ensayo se ha tratado de mostrar que para la sociedad rural y en especial para los trabajadores asalariados rurales, más que la crisis sanitaria, efecto directo del COVID-19, son las medidas de flexibilización laboral las que causan los mayores problemas para la reproducción de las familias rurales. La crisis económica, sumada a la aplicación de las medidas del FMI han llevado a una lectura economicista del gobierno de Moreno y a la aplicación de medidas neoliberales clásicas, una de las cuales es la flexibilización del mercado laboral.

En la actual coyuntura de predominio de las políticas neoliberales, uno de los factores importantes que incide en la desestabilización de los trabajadores rurales es su débil nivel de organización, que impide la construcción de “espacios sociales de resistencia” frente a las estrategias empresariales y de los agronegocios tendientes a una completa desregulación del mercado laboral. No obstante, la protesta social de octubre de 2019, el surgimiento de nuevos líderes indígenas y las iniciativas desplegadas por los sectores populares frente al COVID-19, son elementos acumulativos de lo que (Hirschman, 1988) mencionaba como la “energía social” que puede canalizarse cuando existan las condiciones favorables para la construcción de una sociedad y de un Estado alternativos al fustoso modelo económico neoliberal vigente en el Ecuador.

REFERENCIAS

- Arana, Silvia. (2020). Ecuador: brigadas campesinas abastecen a Guayaquil. ALAINET, 27/05/2020. <https://www.alainet.org/es/articulo/206824>
- Báez, Jonathan. (2020). La desigualdad de riqueza aumenta durante el gobierno de Moreno. <https://www.alainet.org/es/articulo/207499>
- Bauman, Zygmund. (2003). *Trabajo, consumo y nuevos pobres*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Bourdieu, Pierre. (1999). *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Coronel, Valeria. (2020). “Crisis de la política de regateo y renovación del movimiento popular ecuatoriano”. En, F. Ramírez Gallegos, *Octubre y el derecho a la resistencia. La revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 309-329.
- EXPOFLORES (2020). *Información económica*. <https://expoflores.com/inteligencia-de-mercados/>
- Fransoi, María Sol. (2019). “Agronegocio del brócoli y semiproletarización. Corolarios del vínculo laboral en una comuna indígena de la Sierra Central de Ecuador”. *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, vol. 4 (8), pp. 80-105.
- Hirschman, Albert, O. (1988). “The principle of conservation and mutation of social energy”. En, A. Sheldon and P. Hakim (edits.), *Direct to the poor. Grassroots development in Latin America*, London: Lynne Rienner Pub.
- IICA. (2020). *La agricultura familiar y el abastecimiento agroalimentario ante la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe*, San José: IICA.
- Indymedia. (2020). Trabajadores florícolas de Cayambe denuncian despido intempestivo en emergencia sanitaria. <http://ecuador.indymedia.org/?p=1888>
- Martínez Valle, Luciano (2015). “Agronegocio y proletarización rural en la sierra central de Ecuador, provincia de Cotopaxi”. En, A. Riella y P. Macheroni, *Asalariados Rurales en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO, pp. 25-47.
- Martínez Valle, Luciano. (2017). “Agribusiness, peasant agriculture and labour markets: Ecuador in comparative perspective”. *Journal of Agrarian Change*. Vol. 17 (4), pp. 680-693.
- Martínez Valle, Luciano (2019). “Clientelismo en los agronegocios de Ecuador: empresarios y trabajadores rurales”. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 107, pp.75-94.
- Ortiz Crespo, Santiago. (2020). “Ecuador: deriva autoritaria y levantamiento indígena

popular. En, F. Ramírez Gallegos. *Octubre y el derecho a la resistencia. La revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. Buenos Aires: CLACSO, pp.85-110

Pérez Sáinz, Juan Pablo. (2016). *Una historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados desde el siglo XIX hasta hoy*. Buenos Aires: siglo veintiuno editores.

Parodi, Camila y Sticotti, Nicolas. (eds.) (2020). *Ecuador, La insurrección de octubre*, Buenos Aires: CLACSO.

Ramírez Gallegos, Franklin. (edit.) (2020). *Octubre y el derecho a la resistencia. La revuelta popular y neoliberalismo autoritario*. Buenos Aires: CLACSO.

Scott, James. C. (2004) *Los dominados y el arte de la resistencia*, México: Ediciones Era.

El campo en tiempos de crisis, Chile, 2019–2020

Fabián Almonacid Z.*

Introducción

¿Qué está pasando en el mundo rural hoy? Pienso en Chile, aunque la misma pregunta podría hacerse para el resto de Latinoamérica, y con algunas diferencias para el resto del mundo, como por ejemplo, para Estados Unidos o Europa. ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a las actividades rurales y a las personas que viven de y/o en el campo? ¿Hay una agudización de las condiciones de vida?, para aquellos que ya vivían pobremente. ¿Será este un momento más para el fortalecimiento del capitalismo neoliberal, globalizado?, el que ya ha convertido a la naturaleza en una mercancía en toda su extensión, y más aun, ha hecho de la propia naturaleza una forma de acumulación capitalista.

No es fácil responder estas preguntas en medio de una crisis que se ha extendido por varios meses y que parece no tener fin. Especialmente

* Instituto de Historia y Ciencias Sociales y Núcleo de Investigación de Excelencia de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh), Universidad Austral de Chile, falmonac@uach.cl. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo Agrario, desigualdades y ruralidades.

para un historiador, que preferiría ver el fenómeno estudiado ya concluido. Supongo que, con diferencias, las mismas dificultades se presentan para cualquier cientista social. El confinamiento, las limitaciones de movilización, las recomendaciones sanitarias, impiden o complican hacer investigación en terreno. Quisiéramos, eso es seguro, conocer mucho más y mejor, lo que está pasando en el mundo rural hoy.

Sin embargo, históricamente, la realidad nunca ha cambiado radicalmente en un tiempo corto, bajo ninguna circunstancia. Lo nuevo, y allí hay un error de los medios de comunicación y de algunos “expertos”, ya sean economistas u otros, que anticipan y advierten el nuevo mundo completamente diferente que vendrá, es una categoría relativa, que tienes más de ilusión, que de realidad. En este sentido, la pandemia no modificará significativamente la realidad rural ya existente, aunque ello no implica desconocer que habrá cambios importantes, pero que, en todo caso, serán transformaciones paulatinas que se manifestarán en el mediano plazo.

Aunque no es posible conocer en profundidad todo lo que sucede hoy día en el mundo rural, es posible entender esta realidad e imaginarla, mediante la extrapolación de la realidad conocida previamente. Hoy en día, con la historia en la mente, estamos mucho menos desorientados que lo que estaríamos si tuviéramos que conocer la realidad actual por primera vez, para poder hablar de ella.

Además, siempre es posible recoger información de lo que está sucediendo, tomar el pulso a la actividad rural, a través de diversas fuentes. La estadística oficial, la prensa, los informes especializados y conversaciones telefónicas y otras por Zoom, además de la asistencia a algunos seminarios, permiten conocer qué están pensando otros colegas y personas relacionadas con el agro, y reafirmar algunas ideas previas y también, abrir nuevas preguntas.

Tiempos de crisis

Para quienes pretenden entender el mundo actual desde el concepto de crisis, considerando la teoría y los estudios que se dedican a las crisis del capitalismo, que ya vienen haciéndose por varias décadas, y poniendo atención a cómo ellas han ido modelando la historia reciente chilena y latinoamericana, hay que constatar que la realidad actual plantea serios desafíos a la teoría y a la reflexión¹. Si se quiere, se ha producido un desajuste entre realidad y teoría. Algo similar ya había ocurrido con los estudios sobre crisis escritos antes de 2008, los que, por supuesto, no incorporan toda la experiencia que esa crisis económica y sus efectos han generado. Necesariamente, ese momento provocó una profunda renovación del conocimiento sobre las crisis.

Ten cuidado con lo que desees, porque es posible que se cumpla, dice el conocido proverbio. Y algo de esto ha ocurrido en Chile en el último año, digo, desde en octubre de 2019 en adelante. Llevábamos mucho tiempo anhelando el fin del neoliberalismo, esperando su reemplazo y superación, al igual como en algún momento anterior Marx esperó la crisis final del capitalismo para poder hablar de ella en su libro sobre *El capital*, y ni en nuestros mejores sueños anticipamos la verdadera sublevación ciudadana que se inició en octubre de 2019.

Sorprendidos por el alcance que tenía en la sociedad, economía y política chilena el capitalismo neoliberal globalizado, había escepticismo sobre la posibilidad de variar ese rumbo. Esto de hacer la historia resultaba algo iluso en Chile, hasta el año pasado. Una cierta frustración, desencanto, apatía, resignación, pesimismo, alienación, etc., se había instalado en Chile, en atención a la neoliberalización que nuestro país había experimentado. Como una obsesión, a pesar nuestro, recordábamos la frase de Margareth Thatcher, *No hay alternativa*. El conformismo y el

¹ Entre los estudios de interés sobre las crisis del capitalismo, destacamos a Robert Boyer (2015), Robert Brenner (2009), David Harvey (2010; 2014a; 2014b), Philip McMichael (2016), Branko Milanovic (2019), Leo Panitch y Sam Gindin (2015) y Corsino Vela (2018).

sálvese quien pueda, era la actitud más extendida en Chile. El individualismo se había convertido en el mayor éxito del “modelo”.

La realidad que se comenzó a gestar en las calles de Santiago y en cada lugar de Chile, desde el norte al extremo sur, en octubre de 2019, fue un verdadero terremoto social. Protestas diarias en las calles, barrios y carreteras. Una movilización ciudadana permanente y creciente, como pocas veces, quizás nunca, se había visto en Chile. Sin dirigentes reconocibles, más cercana a los equipos de fútbol y a los pueblos indígenas que a los partidos políticos, y con un montón de demandas. Las masivas manifestaciones, de jóvenes, pobladores, jubilados, mujeres, en fin, de todos los sectores populares y medios de la sociedad, e incluso de sectores de la clase alta, recibieron como respuesta una dura represión estatal, demostrando que el Estado no comprendió la envergadura que esto tenía, y buscó frenar las demandas sociales a punta de disparos, bombas lacrimógenas, palos y, en otra dimensión, también manipulando la información y los medios de comunicación.

Las protestas fueron escalando en apoyo popular y se expresaron también con violencia, con la destrucción de las fachadas e incluso la quema de bancos, casinos, estaciones de metro, tiendas, supermercados, iglesias, plazas, estatuas. De todo lo que pudiera representar el orden establecido, neoliberal, pero también del más tradicional. Se impuso el estado de emergencia y el toque de queda. Los militares salieron a las calles y carreteras; en un país donde la memoria de la dictadura militar sigue muy viva, esa decisión gubernamental terminó agravando el problema. El presidente de la república, de derecha, sin entender nada, o quizás, entendiéndolo mejor que nadie, señaló el mismo fin de semana de octubre de 2019, cuando comenzaron las protestas: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. En verdad, ni siquiera los propios militares querían asumir esa tarea, y lo dijeron públicamente. Las ciudades chilenas, casi sin excepción, quedaron cual tierra quemada en sus áreas centrales, y todos los establecimientos comerciales cerrados o funcionando detrás de rejas o planchas de acero, como protección contra los ataques y saqueos. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, murieron 34 personas y fueron heridas 3.842, 460 de las cuales recibieron daño

ocular, incluso pérdida de la visión. A junio de 2020, se habían iniciado 1.918 causas judiciales a agentes del Estado por diversos delitos, desde apremios ilegítimos a homicidio (INDH, 2020)².

El 15 de noviembre de 2019, la clase política, desde la izquierda a la derecha, representada por los parlamentarios, que en su mayoría parecía no haberle importado los defectos del orden neoliberal construido en Chile, que se había negado sistemáticamente, y se sigue negando, a modificar los pilares del “modelo”; salud, educación y previsión privada, que conocía, pero que no quería entender lo que significaban los bajos sueldos, las pensiones miserables, una desigualdad creciente, el alza del costo de la vida, entre algunos problemas más importantes, de pronto, esa misma clase política, por miedo seguramente a ver derrumbarse lo construido tan favorablemente para algunos grupos y sectores de la sociedad, se animó a suscribir un compromiso de realizar, a más tardar en abril de 2020, un plebiscito para definir si se redacta una nueva constitución política y la composición que tendría el futuro congreso constituyente³. Este acuerdo dejó conforme a una mayoría, pero el movimiento ciudadano continuó vigente, a la espera del plebiscito de abril de 2020. Para algunos, seguramente los menos partidarios de un cambio institucional, el acuerdo permitió ganar tiempo y desactivar el movimiento social, lo que en parte ocurrió.

El campo durante la crisis social

¿Qué pasó en esos meses, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en el campo? Aunque el movimiento social se concentró en las ciudades principales, donde se dieron los mayores enfrentamientos entre la policía y manifestantes, el campo no estuvo al margen, por supuesto. En Chile central, zona de viñedos y producción frutícola de exportación, hubo algunas dificultades con la actividad portuaria, pero menor. Otro

² Información de Acciones Judiciales, al 12 de junio de 2020 en www.indh.cl.

³ “Logran histórico acuerdo para Nueva Constitución: participación ciudadana será clave”, 15 de noviembre de 2019, en www.senado.cl.

tanto ocurrió con las actividades silvoagropecuarias en el sur de Chile⁴. La mano de obra temporera, tanto la que habita en el campo, como la que vive en ciudades, siguió desarrollando la rutina de su contratación a trato, sin límite de jornada laboral, en condiciones de explotación y pobreza. El ministro de Agricultura, durante la crisis social que vivía Chile, se enorgullecía del poco impacto que ella tenía en la agricultura, excepto algunos problemas logísticos. La mano de obra había seguido concurriendo a las labores de cosecha de fin de año, en una normalidad aparente. Por supuesto, los trabajadores agrícolas, parte del movimiento social nacional, han visto en ello también una posibilidad de mejorar sus propias condiciones de vida.

Sorprendentemente, el ministro de Agricultura, muy cercano a las empresas y grandes propietarios agrícolas, terminó reconociendo a fines de noviembre de 2019 que la crisis social había dejado al descubierto las brechas sociales existentes en el mundo rural⁵. Una pobreza, aunque reducida en las últimas décadas, pero que todavía era el doble de la urbana, un 16,5% el año 2017, contra una urbana, de 7,4%. Y medida en términos multidimensionales (educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda), la pobreza rural ese año llegaba a 37,4%, frente a la urbana, de 18,3%. Asimismo, el ministro anticipaba que los más afectados económicamente podrían ser los campesinos, por su dependencia de la venta de productos frescos en ferias libres urbanas.

De este modo, como sucedió con el país en general, también respecto al campo se empezaron a observar con atención las fisuras del “modelo” neoliberal. Por años, la pobreza y la desigualdad rural han importado poco, pues lo fundamental ha sido mantener un crecimiento productivo permanente, sin considerar que ello se ha hecho al costo de una también creciente precarización del trabajo agrario y un desarrollo geográfico desigual.

⁴ Para conocer la historia reciente de la agricultura del sur de Chile, ver Almonacid (2020).

⁵ “Entrevista con ministro de Agricultura, Antonio Walker: Cómo está enfrentando el sector agrícola la crisis social”, y “¿Cómo se ha visto afectado uno de los principales sectores productivos? Consecuencias del estallido social en la agricultura chilena”, noviembre de 2019, en www.coagra.cl.

Por su parte, la situación del sur de Chile fue más compleja en esos meses, dado los problemas históricos acumulados. El conflicto de las comunidades y organizaciones mapuche, con empresas forestales, algunos propietarios agrícolas y el Estado, comenzó a tomar una fuerza renovada desde octubre de 2019 en adelante. En verdad, el conflicto ya venía siendo importante desde noviembre de 2018, cuando fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca, hijo y nieto de destacados lonkos de Temucucui, zona emblemática en este conflicto, en la región de La Araucanía, por fuerzas especiales de Carabineros, de un tiro por la espalda con armamento de guerra.

El contingente policial era parte del llamado “Comando Jungla”, grupo militarizado con instrucción en la selva colombiana, de allí su nombre, que había comenzado a actuar en junio de 2018 en La Araucanía, para la lucha contra el terrorismo en territorio mapuche, según dichos del propio presidente Piñera⁶.

Fuera del rechazo generalizado de este asesinato, el hecho dio origen a una mayor unidad entre mapuche. El 1 de diciembre de 2018 se reunieron en Temucucui diferentes agrupaciones mapuche, demandando la desmilitarización del territorio mapuche y llamando a “fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial en el Wallmapuche”. Pedían que se esclarecieran mediante una comisión las violaciones de los derechos humanos del pueblo mapuche, así como un resarcimiento e indemnización, para “establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche”. Además, reiteraban su derecho a la libre determinación y llamaban a la desobediencia y la movilización en el Wallmapuche y en todo el territorio chileno⁷.

En el marco de la crisis social y su posible salida constitucional, las comunidades y agrupaciones mapuche también vieron una posibilidad de

⁶ “¿Invento de la prensa?: el origen del “Comando Jungla” de Carabineros”, 28 de noviembre de 2018, en www.biobiochile.cl.

⁷ “Futa Trawun en Temucucui: Amulepe Tai Weichan. Avanzar a la libredeterminación y a la recuperación y control territorial”, 2 de diciembre de 2018, en www.mapuexpress.org.

pensar su relación con el Estado chileno. Dirigentes tradicionales, como Aucán Huilcamán, dieron forma ya en noviembre de 2019 a una Asamblea Constituyente Mapuche, en Temuco, la que comenzó a deliberar por separado y antes de la chilena, un estatuto o constitución propia. Cuando comunicaron esta decisión al presidente de la república de Chile, a mediados de noviembre, declararon que su proceso constituyente “no se supeditará al de nuestros vecinos chilenos”. Efectivamente, el 12 de diciembre de 2019, 300 dirigentes reunidos como Asamblea Constituyente Mapuche, en Temuco, acordaron las bases de un Estatuto del Gobierno Mapuche, el que debería ser discutido en las comunidades, para finalmente validar el Estatuto en abril de 2020, antes del “Plebiscito del Pueblo Chileno”⁸.

Por esos mismos días, diciembre de 2019, Aucán Huilcamán escribió a la diputada Emilia Nuyado, la primera mujer huilliche miembro del parlamento, y en su nombre, a todos los parlamentarios, rechazando los cupos que ella había pedido se entregaran a los indígenas en el futuro proceso constituyente chileno, pues esto implicaba desconocer el derecho a la libre determinación del pueblo mapuche⁹. A pesar de lo indicado, la propuesta de Nuyado prosperó y actualmente se encuentra en trámite una reforma constitucional para dar escaños reservados a los indígenas en ese posible futuro Congreso Constituyente. Huilcamán se sigue oponiendo a la medida y amenazaba a fines de agosto de 2020, con llevar el asunto al Tribunal Constitucional¹⁰.

En general, la crisis experimentada por Chile desde octubre de 2019 en adelante, así se percibía en marzo de 2020, a la espera del plebiscito, no era solo una crisis política, sino una profunda crisis social y cultural, que afectaba al orden social, en un sentido amplio, y que significaba un

⁸ “Asamblea constituyente mapuche para un gobierno mapuche”, 13 de diciembre de 2019, en <http://revistadefrente.cl/>

⁹ Carta de Aucán Huilcamán a la diputada Emilia Nuyado, 17 de diciembre de 2019, copia digital en propiedad del autor, facilitada por el propio Huilcamán.

¹⁰ “Falta la consulta indígena: Organizaciones mapuche piden al presidente vetar proyecto de escaños reservados”, 22 de agosto de 2020, en www.radiouchile.cl.

momento histórico en el que se abrían las posibilidades de generar una nueva constitución, pero también un nuevo orden social, que reemplazara al neoliberal existente. En definitiva, el debate constitucional era un aspecto dentro de una reflexión más amplia sobre la sociedad futura, que claramente pocos quieren que tenga la desigualdad extrema de la actual y una pobreza oculta debajo de subsidios y prestaciones estatales.

La crisis sanitaria y económica

Cuando todo hacía pensar que marzo sería un mes de movilizaciones, comenzando por el 8 de marzo, el día internacional de la mujer, preparando el ambiente para el plebiscito del 26 de abril, a mediados de marzo la pandemia comenzó a extenderse rápidamente por Chile, y a fines de ese mes el país comenzó a confinarse paulatinamente, con algunas ciudades tempranamente en cuarentena, con cordones sanitarios y con restricciones de movilidad.

Finalmente, el 19 de marzo, parlamentarios y partidos políticos, acordaron postergar el plebiscito para el 25 de octubre de 2020¹¹. También se acordó que las elecciones de los futuros constituyentes, de aprobarse este proceso, serían en abril de 2021.

Para los chilenos, la realidad desde octubre de 2019 se había alterado, y un vendaval de ideas, emociones y acciones, revolucionaban todo, dejándonos sorprendidos y, a los intelectuales, viendo cómo poder entender todo ello con herramientas teóricas y con historias que no se ajustaban a lo que ocurría. Pronto se impuso una idea; el reconocimiento generalizado de las desigualdades e injusticias que existían en la sociedad chilena. Ya no podíamos seguir viviendo en un país tan desigual, con tanta pobreza disfrazada detrás del endeudamiento y del asistencialismo, y con tantos territorios llevándose lo peor del desarrollo.

¹¹ “Acuerdo político posterga la realización del plebiscito nacional”, 23 de marzo de 2020, en www.servel.cl.

Evidentemente, la pandemia ha sido un nivel superior. Un desastre económico. Una realidad que supera todo lo imaginado. Una sociedad paralizada. Una vida cotidiana trastornada. Por supuesto, los sueños y las esperanzas de construir un nuevo Chile, aunque vigentes, han quedado postergados, sobrepasados, por la situación sanitaria mundial.

Entre marzo y el 10 de septiembre de 2020, Chile ha tenido 485.277 contagiados, o sea, una tasa de 2.493 por 100.000 habitantes, mientras han muerto 16.165 personas, lo que da una tasa de mortalidad acumulada de 83,1 por 100.000 habitantes (Ministerio de Salud, 2020). Por regiones, los contagios y muertos se han concentrado en la región metropolitana, el norte y el extremo sur. El centro-sur y sur, las regiones agrícolas chilenas principales, han tenido una incidencia menor de la enfermedad. Incluso las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, la zona principal de residencia de los mapuche, con una fuerte economía campesina, pero también con alta actividad forestal, ganadera y agricultura cerealera y de exportación (frutas, flores y bulbos de flores), ha tenido los niveles más bajos de contagio. Aunque esto está cambiando, en este momento la región de Los Ríos tiene una tasa de 339,5 por cien mil de contagios, unas 7 veces menos que el promedio nacional, y 11 veces menor que el promedio de la Región Metropolitana.

Sin tener claro de por qué se ha dado este menor contagio en esta zona, teniendo Chile una gran variedad climática, se podría afirmar que el virus se ha extendido menos en regiones húmedas, como en el sur de Chile (Linares y Díaz, 2020)¹². Si esto fuera así, en Valdivia y todo el sur, cada vez menos húmedo hacia el verano, los contagios deberían incrementarse. Algo de eso ha estado ocurriendo en Valdivia; los máximos históricos no fueron en pleno invierno, sino que están presentándose en el mes de septiembre, y seguramente seguirán aumentando. Por otro lado, es destacable que en algunas regiones la pandemia ha afectado más a las comunas rurales, más que a las urbanas, como en el caso de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos (ODEPA, 2020c).

¹² “Corona virus, clima y temperatura: qué relación hay”, 20 de abril de 2020, en www.isciii.es; y “Un estudio australiano sugiere que el clima seco aumenta el riesgo de Covid-19”, 2 de junio de 2020, en www.abc.es.

La epidemia ha provocado una crisis económica de proporciones. La paralización del comercio, los servicios y el transporte, ha generado una enorme disminución de empleos (INE, 2020)¹³. Al mes de agosto, se calculaba una pérdida de 2,3 millones de empleos. Si se sumaban los cesantes, los que buscarían trabajo por primera vez, si se pudiera, y los que se han acogido a la ley de protección del empleo, con sus contratos suspendidos, en Chile había un 31% de desocupación. Esas cifras son las más altas desde la crisis económica de 1982. En términos de género, para el trimestre mayo-julio de 2020, la reducción del empleo ha afectado más a los hombres. Desde unos valores de participación masculina cercanos al 75%, esa cifra ha caído al 62%. En el caso de las mujeres, la reducción es desde un poco más del 50% en los últimos años al 41% actual.

El campo durante la crisis sanitaria

Las primeras manifestaciones de la pandemia en el mundo rural fueron la detención/demora de las exportaciones de frutas de la temporada 2019-2020, entre enero y marzo. China paralizó algunas compras de frutas y tampoco hubo transporte marítimo suficiente disponible al final de la temporada. Pero ello fue un impacto menor. Después hubo una recuperación de las ventas. Además, en julio de 2020, se supo que los exportadores de fruta chilena y la Cámara de Comercio Chino relacionada con el rubro, firmaron un acuerdo para favorecer la producción y el comercio exterior de fruta fresca¹⁴. Por otro lado, sí hubo una contracción de la demanda exterior de fruta fresca en mayo, por parte de USA, Japón, Corea del Sur y Brasil¹⁵. En el resto del año, especialmente los cítricos del norte de Chile, han tenido una buena temporada de exportación¹⁶.

¹³ “La crisis del empleo sigue cuesta abajo...”, 13 de agosto de 2020, en www.elmostrador.cl.

¹⁴ “Chile y China firman acuerdo de cooperación...”, 21 de julio de 2020, en www.mundomaritimo.cl.

¹⁵ “Por segundo mes consecutivo y pese al COVID-19, exportaciones de Chile a China crecen...”, 8 de junio de 2020, en www.simfruit.cl.

¹⁶ “Exportaciones de clementinas cierran temporada 2020 con crecimiento del 3%”, 26 de agosto de 2020, en www.simfruit.cl.

De allí en adelante, la agricultura comercial, en general, ha podido desarrollar sus actividades sin grandes complicaciones. El propio Ministerio de Agricultura ha promovido esta situación con el eslogan “La agricultura no para”. Esto es, la producción de alimentos y el abastecimiento del consumo urbano.

En las últimas décadas, el empleo agrícola ha girado en torno a las 800 mil personas, aunque la estacionalidad se ha ido incrementando. En la década de los 2000, la diferencia estacional era de unas 160 mil personas. Esa cifra ha seguido incrementándose (Anríquez et al, 2016). Unos 350 mil de esos trabajadores, hacia 2012, eran temporeros.

Con el paso del tiempo, el grupo de los temporeros se ha ido envejeciendo. En 2013, el promedio de edad era de 40 años. Asimismo, ha aumentado la participación de mujeres, especialmente en temporada alta. Además, según datos del 2013, el 70% de los trabajadores temporeros decía estar satisfecho con su empleo agrícola, aunque el 62% señalaba que cambiaría de trabajo si tuviera la oportunidad y un 40% afirmaba trabajar allí porque no tenía otra opción. No por nada, no es difícil encontrar un empresario agrícola que declare que el trabajo temporero agrícola recoge las sobras que dejan los otros sectores de la economía: viejos, mujeres, cesantes y jóvenes (Echavarri, 2018). Esto especialmente ocurre en el sur de Chile.

El empleo agrícola, como todo el empleo nacional, ha sufrido una reducción. Entre diciembre 2019-febrero 2020, hubo 726.950 personas empleadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, lo que fue un 14,5% menos que el mismo periodo del año anterior. La crisis social impactó en el empleo agrícola (ODEPA, 2020a; ODEPA, 2020b). Del total de ocupados, un 41,6% eran permanentes, mientras que 57,5% eran temporales. De los permanentes, 302.411 personas, 43.849 eran mujeres, mientras que de los 417.996 ocupados temporales, unas 152.150 fueron mujeres. Como se aprecia, las mujeres se concentran en su mayoría en el empleo temporal.

Considerando la distribución regional de los ocupados, el 9,5% trabajó en el norte, el 64,9% lo hizo en el centro y el 25,6% en el sur y extremo sur del país. Aunque en términos generales, el sur y extremo sur no tuvo más que un cuarto del empleo, si desagregamos unos de sus componentes, trabajo por cuenta propia, esa zona concentraba el 46,7% del total nacional, debido a la fuerte presencia de la agricultura campesina.

Sin embargo, la pandemia ha provocado un efecto aun mayor; en abril-junio de 2020, temporada baja para la agricultura, se emplearon 467.601 personas, 26,8% menos que el mismo periodo del año anterior. De estos trabajadores, 58,6% eran trabajadores permanentes y 41,4%, temporales. De los permanentes, 274.014 personas, 37.265 eran mujeres, mientras que de los 193.586 temporales, 54.591 fueron mujeres.

Del trimestre abril-junio 2020, si se consideran todos los trabajadores informales (cuenta propia, familiares no remunerados y asalariados que no reciben pago de salud y previsión), la cifra llega a 174.933 personas, el 37,4% del total empleado. Por otro lado, solo un 5,2% de la fuerza ocupada es extranjera, menos de 25 mil personas, especialmente venezolanos, haitianos, bolivianos y peruanos.

En general, de los ocupados, un 12,2% trabajó en el norte, un 59,7% en el centro y 27,9% en el sur y extremo sur de Chile.

Ha habido menos trabajo y en peores condiciones durante la pandemia. Considerando la crisis económica generalizada, muchas familias que antes optaban por el trabajo agrícola asalariado, especialmente temporero, como un complemento al ingreso familiar, ahora van a buscar trabajo al campo sin tener ningún ingreso más que las ayudas estatales. Ante la cesantía familiar, cualquier trabajo en el campo es bueno, por lo que, hasta donde conocemos, la mayor precariedad de las familias rurales y asalariadas urbanas, hace que estén más dispuestos a trabajar más horas y por menos pago. Al parecer, dada la crisis económica, los empresarios y agricultores han mantenido o incluso rebajado los pagos por trato en las faenas agrícolas. Por ejemplo, en las labores de mantenimiento en las viñas, en años anteriores en agosto se pagaba más de 100 pesos, un poco

más de 10 centavos de dólar, por el amarre de cada planta, y ahora se está pagando menos de esa cantidad¹⁷. Según los testimonios de algunas dirigentes agrícolas, dados en un Foro de ANAMURI, en agosto pasado, se puede constatar las pésimas condiciones laborales en que se están desarrollando en este momento las temporeras. Sin las condiciones sanitarias adecuadas y sometidas a una mayor explotación. Con la pandemia, en algunos casos ni siquiera les proveen del agua que necesitan. Ellas mismas deben llevar su botella de agua. Por supuesto, dada la escasez del trabajo, a nadie se le ocurriría exigir mejores condiciones de trabajo y una paga mayor. Por lo demás, una parte no menor en la eficiente organización del trabajo temporero lo tienen las empresas contratistas, que son las que prestan servicios agrícolas a los campos, y contratan la mano de obra que estos requieren. Esto ocurre especialmente en la zona central de Chile. Por su parte, en los *packing*, las jornadas son hasta de 13 horas continuas, cuando se está en temporada alta. Se gana un poco más de dinero, pero prácticamente las trabajadoras no ven la luz del día, porque ingresan a las 13 horas y pueden terminar a las 2 de la madrugada.

Por otro lado, para los pequeños agricultores la pandemia ha generado dificultades. Según lo que más conocemos, los campesinos del sur de Chile, el comienzo de la pandemia, terminando el verano, les ha encontrado con suficientes provisiones para poder encerrarse durante el resto del año. La mayoría está viviendo con lo que ha guardado y con el trabajo propio. Las limitaciones para acceder a las ciudades, por cuarentenas y cordones sanitarios, han afectado su concurrencia a ferias libres, por lo que seguramente tendrán serios obstáculos para enfrentar el próximo año, ante la falta de ingresos para comprar semillas, animales, insumos, etc. (Cañulef, 2020)

Por su parte, los medianos y grandes agricultores del sur de Chile no han tenido mayores complicaciones con la pandemia. Han podido distribuir

¹⁷ Testimonios de Brunilda Álvarez, de la región Valparaíso, e Ingrid Rivera, de la región de O'Higgins, en Foro Día Nacional de Asalariadas Agrícolas, ANAMURI, 26 de agosto de 2020, en www.facebook.com/AnamuriAGChile/videos.

sin mayores problemas sus productos (cultivos, lácteos y carne) (Köbrich, 2020). El Estado, además, se ha comprometido en asegurar la continuidad de la cadena productiva.

Un problema de diferente orden y nivel, que afecta a todos los propietarios de tierras en Chile, se ha producido junto con la crisis sanitaria, como es el Reavalúo de Bienes Raíces Agrícolas 2020, que fue dado a conocer a comienzos de año por el Servicio de Impuestos Internos. Esto es el resultado de transformaciones mayores que está viviendo el mundo rural, como es el incremento del valor de la tierra, debido al aumento y diversidad de las actividades silvoagropecuarias e inmobiliarias¹⁸. La sorpresa para los agricultores en general, ha sido que los avalúos subieron en promedio nacional un 92,3% del valor de 2016, mucho más rápido que el PIB agrícola, que creció un 7% desde 2016¹⁹. En algunas regiones del sur de Chile, como el Biobío, los reavalúos subieron 116,5% y en Los Ríos, 106,3%. Por su parte, en La Araucanía se incrementaron un 91,4% y en Los Lagos, 77,6%. El menor incremento de Los Lagos, zona agropecuaria, sugiere que ha subido menos el valor fiscal de las tierras agrícolas que el de las tierras no arables, para uso forestal. En todo caso, dado el aumento también del límite de avalúo que exime del pago de contribuciones, el aumento efectivo de la recaudación por este impuesto subirá apenas un 5%, aunque por regiones; en Biobío sube un 21,9%, en La Araucanía un 6,7%, en Los Ríos, 7,7%, mientras en Los Lagos, apenas lo haría un 0,8%. Por el contrario, en casi todo el norte y región de Valparaíso, las contribuciones han bajado.

Lo más preocupante de este reavalúo es el aumento del valor fiscal de los predios en las comunas rurales pobres del sur de Chile. Considerando las diez comunas más pobres del año 2016, como se puede ver en el cuadro adjunto, todas ellas han tenido un incremento de su avalúo fiscal. Especialmente, han tenido un aumento efectivo de las contribuciones superior al promedio nacional, con valores muy altos, Lonquimay y San

¹⁸ Toda la información del Reavalúo de Propiedades Rurales 2020, en www.sii.cl.

¹⁹ “Alzas en las contribuciones 2020: su origen y proyecciones”, 6 de abril de 2020, en www.sna.cl.

Juan de la Costa, dos comunas mayoritariamente habitadas por población indígena.

Pobreza de ingresos e incremento de reavalúo y contribuciones en diez comunas más pobres, años 2017 y 2020

Comuna	Región	% pobreza de ingresos, 2017	% Incremento reavalúo agrícola 2020	% incremento contribución 2020
Cholchol	La Araucanía	41,6	94,1	14,8
Alto Biobío	BioBío	39,7	112,3	14,4
Galvarino	La Araucanía	37,3	81,9	4,5
Saavedra	La Araucanía	35,4	92	10,5
Toltén	La Araucanía	35,1	87,9	10
Cobquecura	Ñuble	34,2	100,3	20,9
Lonquimay	La Araucanía	33,5	312,2	39,3
Lumaco	La Araucanía	33,3	87,7	10,5
San Juan de la Costa	Los Lagos	32,1	187,1	25,9
Vilcún	La Araucanía	32	95,3	14,3

Fuente: OES-UFRO, 2019, y datos Reavalúo de Bienes Raíces Agrícolas 2020, en www.sii.cl.

Uno de los efectos directos del reavalúo de los predios agrícolas será que muchos pequeños agricultores, por el aumento del valor fiscal de sus propiedades, ya no podrán ser objeto de beneficios estatales, porque sus tierras superan el valor límite de la propiedad definido por el Estado para la entrega de ayudas. En medio de la pandemia, se calcula que unos 2.600 agricultores han quedado sin acceso a los fondos que el Estado dispone en créditos y subsidios para pequeños agricultores, por tener propiedades de valor superior a 3.500 UF, unos 120 mil dólares²⁰.

²⁰ La Unidad de Fomento (UF) es una unidad monetaria utilizada en Chile que se reajusta diariamente según el índice de precios. Información sobre pequeños agricultores en www.indap.gob.cl; “Gremios y parlamentarios alertan negativos impactos por reavalúo de terrenos agrícolas”, abril de 2020, en www.diarioelcentro.cl; “Agricultores rechazan alza de avalúos y preparan ofensiva”, 19 de mayo de 2020, en www.fedeleche.cl; e información sobre tributación de agricultores en www.sii.cl.

Asimismo, dado que los agricultores pueden optar a pagar impuestos según una renta presunta, si tienen ventas o ingresos anuales inferiores a 9.000 UF, unos 300 mil dólares, pero están obligados a declarar renta efectiva si es superior, muchos medianos agricultores ven detrás de este reavalúo el interés del Estado de hacer que los agricultores paguen impuestos por lo que efectivamente rentan. Se calculaba por mayo de 2020, que unos 2.200 agricultores tendrían que pagar más impuestos al pasar de renta presunta a efectiva.

Fuera de lo señalado, a los agricultores, especialmente a los del sur de Chile, les preocupa mucho más lo que podría venir con el proceso constituyente, principalmente pues creen que el pueblo mapuche pedirá ser atendido en sus demandas históricas, como reconocimiento constitucional, devolución de tierras usurpadas y autonomía territorial. Se abre, desde su perspectiva de terratenientes, un posible ataque a su derecho de propiedad de la tierra (Köbrich, 2020).

En realidad, en la base del conflicto mapuche está la pugna por el dominio de la tierra y del agua. Eso explica los ataques de mapuche, o de los que los apoyan, a predios forestales, incluyendo la quema de instalaciones y camiones, llegando hasta el asesinato de un matrimonio de agricultores en 2013. Ya van más de 20 años del actual conflicto mapuche (Abujatum, 2020; Paineicura Medina, 2015)²¹.

En ese contexto, un grupo de agricultores y transportistas del sur de Chile se han unido en torno al eslogan “Paz en La Araucanía”, exigiendo al Estado resolver el conflicto con los mapuche, del que se sienten víctimas, pero no protagonistas, a pesar de que algunos de ellos residen en fundos reclamados por los mapuche, o han participado activamente en la arena política local, e incluso en una suerte de autodefensa de los campos y predios forestales. El propio gobierno de derecha actual, en 2018, validó ese eslogan y propuso un “Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, el que no prosperó.

²¹ “Informe reservado de Carabineros sobre los grupos de autodefensa de los agricultores en la zona mapuche”, 5 de agosto de 2020, en www.ciperchile.cl.

Difícilmente, el Estado podría dar Paz en La Araucanía, como piden algunos, sin afectar los intereses de esos mismos propietarios de tierras y empresarios, muchos de los cuales están muy lejos de comprender las demandas mapuche. El representante de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, Juan de Dios Fuentes, dijo en diciembre de 2015 que el Convenio 169 era una “norma deleznable”. A juicio de Pedro Cayuqueo, reconocido periodista y escritor mapuche, lo que en realidad quieren esos agricultores es una “paz sin mapuche”²².

Un racismo renovado se ha extendido por la región, yendo desde los propietarios que defienden sus bienes de las “hordas” mapuche, hasta los sectores más bajos de la escala social, muchos de ellos con ascendencia mapuche. A fines de julio, en el marco de la huelga de hambre realizada por 27 comuneros mapuche, que reclamaban juicios justos o el derecho de conmutar la cárcel por el arresto domiciliario, varias comunidades mapuche decidieron presionar al gobierno tomándose los edificios de seis municipalidades de La Araucanía. Después de varios días de ocupación, sin que el gobierno interviniera para resolver políticamente el problema, el 1 de agosto, en la Municipalidad de Curacautín se produjo un desalojo del edificio por parte de Carabineros y más de 50 civiles que llegaron armados de palos, instigados por una dirigente de Paz en La Araucanía y por otra del comercio local. En ese día, se escucharon gritos como “hay que sacar a esos indios de mierda” y “el que no salta es mapuche”²³. También, con la ayuda de funcionarios municipales, esos civiles sacaron banderas, lienzos e indumentaria mapuche, y los vehículos de las familias mapuche que estaban en la municipalidad, procediendo a quemarlo todo. La policía solo detuvo a los mapuche. Posteriormente, el gobierno ordenó el desalojo de las demás municipalidades, resultando varios de esos edificios incendiados²⁴. Estos hechos muestran el nivel al que ha llegado el conflicto mapuche. Ya no son solo los terratenientes

²² “¿Paz en la Araucanía?”, 22 de diciembre de 2015, en www.latercera.cl.

²³ “Curacautín: presentan recurso de protección contra vocera de APRA...”, 1 de septiembre de 2020, en www.eldesconcierto.cl.

²⁴ “36 detenidos en dejó desalojo de municipalidades en La Araucanía”, 2 de agosto de 2020, en www.araucaniadiario.cl.

y empresarios contra mapuche, sino que se han sumado los sectores populares.

Por otra parte, a fines de agosto, hubo en Chile una paralización nacional de camioneros, reclamando al gobierno mayor seguridad para el transporte por La Araucanía, donde regularmente los camiones son objeto de ataques, con piedras y balas, o directamente incendiados²⁵. Aunque la paralización, con la ocupación de las principales carreteras del país, en medio de la pandemia, era un despropósito político, y tuvo un amplio repudio ciudadano, el gobierno, cercano políticamente a los transportistas, fue muy tolerante y no les aplicó a los camioneros las leyes que sí ha aplicado a grupos opositores, ni los desalojó de las carreteras, como muchos pedían. Por supuesto, los agricultores del sur de Chile apoyaron directamente a los camioneros, así como también, habiendo comenzado la campaña para el plebiscito del 26 de octubre, los partidarios del rechazo a una nueva constitución. Finalmente, el gobierno debió negociar con los camioneros, los que terminaron su paro y toma de carreteras el 2 de septiembre, condicionado a una serie de beneficios y futuros proyectos para dar más seguridad al transporte carretero.

Tantos los camioneros que piden mayor seguridad, como los agricultores, que piden paz en La Araucanía, están convencidos que el gobierno debe reprimir a delincuentes y terroristas que actúan en el sur de Chile, sin reconocer ninguna participación en el conflicto y desconociendo la complejidad histórica del llamado “conflicto mapuche”. A su vez, el gobierno de Piñera ha dado reiteradas muestras de compartir ese análisis.

²⁵ “Escala la tensión por el paro de camioneros...”, 24 de agosto de 2020, en www.elmostrador.cl; “Piñera confirma que se levanta el paro de camioneros...” y “Paro de camineros...”, 2 de septiembre de 2020, en www.eldesconcierto.cl.

REFERENCIAS

- Abujatum, Jana (2020). “Políticas, acuerdos y proyectos para la Región de La Araucanía 1990 a 2018, y conflicto mapuche”. *Asesoría Técnica Parlamentaria*, mayo, en www.bcn.cl.
- Almonacid, Fabián (2020). *Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Anríquez, Gustavo et al (2016). “Evidencias y desafíos para el empleo estacional en la fruticultura en Chile”. *Temas de la Agenda Pública*, 11, 85. Santiago: Centro de Políticas Públicas, UC.
- Boyer, Robert (2015). *Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des crises*. Paris: Éditions La Découverte.
- Brenner, Robert (2009). *La economía de la turbulencia global. Las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005*. Madrid: Ediciones Akal.
- Cañulef, Jorge (2020). *Entrevista*, funcionario INDAP, encargado de PDTI, San Juan de la Costa, Osorno, Chile, 3 de septiembre.
- Echavarri, Jenaro (2018). *Entrevista*, productor de arándanos, camino a Puyehue, Osorno, Chile, agosto.
- Harvey, David (2010). *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Harvey, David (2014a). *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*. Barcelona: Ediciones Akal.
- Harvey, David (2014b). *Diecisiete contradicciones del capital y el fin del neoliberalismo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- INDH (2020). “Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos, desde el 17 de octubre de 2019 al 13 de marzo de 2020”, en www.indh.cl.
- INE (2020). *Boletín Estadístico, Empleo Trimestral*, N° 62, 28 de agosto de 2020, en www.ine.cl.
- Köbrich, Andreas (2020). *Entrevista*, secretario de SOFO, Temuco, Chile, 28 de agosto.
- Linares, Cristina y Julio Díaz (2020). “Informe del Grupo de Análisis Científico del Corona Virus del ISCIII (GASC-ISCIII), Clima, temperatura y propagación de la COVID-19”, 15 de abril. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, en www.conprueba.cl.
- McMichael, Philip (2016). *Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias*. Barcelona: Icaria Editorial.

- Milanovic, Branko (2019). *Capitalism, alone. The Future of System that Rules the World*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ministerio de Salud (2020). *Informe Epidemiológico N° 50, Enfermedad por SARS-COV-2 (COVID-19), 11 de septiembre de 2020*. Chile: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, en www.minsal.cl.
- ODEPA (2020a). *Boletín bimestral de empleo*, abril. Chile: ODEPA, en www.odepa.cl.
- ODEPA (2020b). *Boletín bimestral de empleo*, agosto. Chile: ODEPA, en www.odepa.cl.
- ODEPA (2020c). *Reporte COVID-19. Abastecimiento e impacto rural, 24 de agosto de 2020*. Chile: ODEPA, en www.odepa.cl.
- OES-UFRO (2019). *Radiografía a la pobreza comunal de la región de La Araucanía-Casen 2017*, agosto. Temuco: OES-UFRO, en <http://oes.ufro.cl/>
- Painecura Medina, Lincoyán (2015). “Paz en La Araucanía: observaciones a su diagnóstico y propuesta”. *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 6, 3, 123-145.
- Panitch, Leo y Sam Gindin (2015). *La construcción del capitalismo global. La economía política del imperio estadounidense*. Madrid: Ediciones Akal.
- Vela, Corsino (2018). *Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva*. Madrid: Traficantes de Sueños.

¿De qué crisis estamos hablando?

Los beneficios de la pandemia para la producción de commodities brasileñas

Maria Aparecida de Moraes Silva*

Mi intención es abordar el tema ‘Desigualdades, protesta social y crisis en la ruralidad’ a partir de los siguientes puntos:

- ¿De qué crisis estamos hablando? El papel del Estado desde el caso brasileño, que parece muy paradigmático, teniendo en cuenta la agricultura y la producción de *commodities*.
- El incremento de la desigualdad como reflejo de la concentración de los capitales y el aumento de la acumulación.

* Profesora Senior del PPPGS (Programa de Posgrado en Sociología) de la UFSCar (Universidad Federal de San Carlos), San Pablo, Brasil. Investigadora del CNPq. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

El objetivo es mostrar que la pandemia ha incrementado los niveles de desigualdad social y, por otro lado, ha permitido el aumento de la concentración de riqueza y de la tierra. El Estado es uno de los principales actores en este proceso.

¿De qué crisis estamos hablando? El papel del Estado

Una presentación rápida de los datos acerca de la producción de *commodities* nos muestra el incremento del área de las principales *commodities* del país. Una de las características del capitalismo agrario en Brasil es el crecimiento por medio de la incorporación de tierras. La llamada frontera agrícola se expande sobre todo en la dirección oeste, desde las primeras décadas del siglo pasado. Este incremento fue más decisivo durante el período de la dictadura militar (1964-1985), cuando fueron implantados los proyectos económicos basados en la “revolución verde”, direccionados por los Estados Unidos. Este período fue caracterizado por la violencia, por medio de la masacre de grupos indígenas en varias provincias del país. Los métodos empleados eran los siguientes: envenenamiento de las aguas de los ríos, diseminación de virus como la viruela, distribución por aviones de dulces contaminados, además de asesinatos por mineros y matones (jagunços) bajo el comando de los terratenientes¹. Además del exterminio de grupos indígenas, miles de campesinos también fueron eliminados o

¹ “La Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011, estima que al menos 8.350 indígenas fueron asesinados entre 1946 y 1988. Las investigaciones apuntan a dos períodos distintos en lo que respecta a las violaciones contra los pueblos indígenas. Antes de diciembre de 1968, las masacres se debieron principalmente a la omisión del Estado. Luego del Acto Institucional 5 (AI-5), con la creación de la Fundación Nacional Indígena (Funai), el régimen militar fue el mayor responsable de los homicidios, que se prolongaron del 1 de abril de 1964 al 15 de marzo de 1985. Los waimiri atroari representan al menos 2650 muertos, solo detrás de los Cinta-Larga (3500 muertos). Según Funai, la población de Waimiri Atroari era de 3.000 personas en 1972. En 1983, solo 350 sobrevivieron a las masacres. En 1987, la población se elevó a 420. Hoy, hay aproximadamente 2 mil personas. El MPF (Ministerio Público Federal) sin embargo, señala en un informe de acción civil pública que el número de víctimas puede ser aún mayor, “considerando que los diferentes conteos del pueblo Kinja en la dictadura sirvieron a ciertos intereses gubernamentales poco preocupados por revelar la verdad”. Fuente: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2019/04/ditadura-militar-waimiri-atroari-massagre-genocidio-aldeia-tribo-amazonia-indigena-indio-governo#>

fueron obligados a dejar sus tierras y buscaron asilo en las periferias urbanas.

Este proceso de acumulaci3n primitiva o, segun el termino de D. Harvey de proceso de ‘acumulaci3n por desposesi3n’, por medio del cual la expropiaci3n de los recursos naturales ocurre, fue fundamental para la “limpieza del terreno” (limpeza do terreno). En otros terminos, “limpiar el terreno”, era el modo de quemar la selva nativa, el bioma y tambi3n sus habitantes, indigenas y campesinos ocupantes de tierras.

Segun las palabras de W. Benjamin, es necesario *cepillar la historia a contrapelo*, es decir, el conocimiento del presente se hace desde que el pasado sea conocido.

Asi, los acontecimientos actuales - acerca de la destrucci3n de los recursos naturales por medio del fuego y la necropolitica (Mbembe, 2016), en que la vida est3 sometida al poder de la muerte, en relaci3n a los grupos originales (indigenas y quilombolas²)-, no solamente son la continuaci3n de este proceso, sino que tambi3n representan un verdadero *brulalisme*, segun A. Mbembe (2020, pp. 8-10):

Dans cet essai, je convoque la notion de brutalisme pour d3crire une 3poque saisie para le pathos de la d3molici3n et de la production, sur une 3chelle plan3taire, de r3serves d’obscurit3. Et de d3chets de toutes sortes, restes, traces, d’une gigantesque d3miurgie ... Par brutalisme, je fais donc r3f3rence au proc3s para lequel le pouvoir en tant que force g3omorphique d3sormais se constitue, s’exprime, se configure, agit et se reproduit para la *fracturation* et la *fissuration* (subrayado por el autor).

En este art3culo no es posible una descripci3n m3s completa sobre los datos econ3micos, pol3ticos y sociales en este momento por lo cual el poder pol3tico del pa3s est3 dominado por fuerzas de la extrema derecha y por el neoliberalismo. El proceso de fractura y fisura, en los terminos de Mbembe, fractura social, en la medida en que las desigualdades

² Quilombolas son los campesinos negros.

aumentan, pero también fractura de la naturaleza, de los biomas³. El objetivo de los terratenientes incendiarios es incrementar el área para la ganadería y luego, las exportaciones de carne. Según informaciones del INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), más de 20% del bioma del Pantanal, considerado el bioma húmedo más grande del mundo, fue quemado en las últimas semanas del mes de septiembre. La destrucción ambiental es de naturaleza sistémica en la medida en que la deforestación es seguida de la desaparición de miles de especies de animales. Según las noticias de los periódicos, como *Folha de S. Paulo*, muchas tierras indígenas fueron quemadas en el Pantanal.

Las siguientes imágenes (foto 1 y 2) son el reflejo del *brutalismo*, de la economía de punción que sigue la historia del capitalismo en el país. Una historia con las características de la colonia exportadora de materias-primas.

³ En 2019, en las tierras indígenas de los Apyterewa la deforestación fue 84,2%; en las tierras de los Trincadeira-Bacajá fue 55,9% (Folha de S. Paulo, 6 de septiembre, 2020, pp. B4-B5).

Los incendios en la Amazonia, en los primeros días del mes de septiembre tuvieron un aumento de 80% en relación al mismo período de 2019 (Folha de S. Paulo, 20 de septiembre, 2020, p.B1). De enero a agosto de 2020, fueron quemados en todo el país, 121.318km². En Amazônia, fueron quemados 34.373 km² y en Pantanal, 18.646km². (Folha de S. Paulo, 28 de septiembre de 2020, p. B4).

Foto 1 – Las quemadas en el Pantanal



Fuente: Araquén Alcântara. <https://gazetaweb.globo.com/portal/>⁴

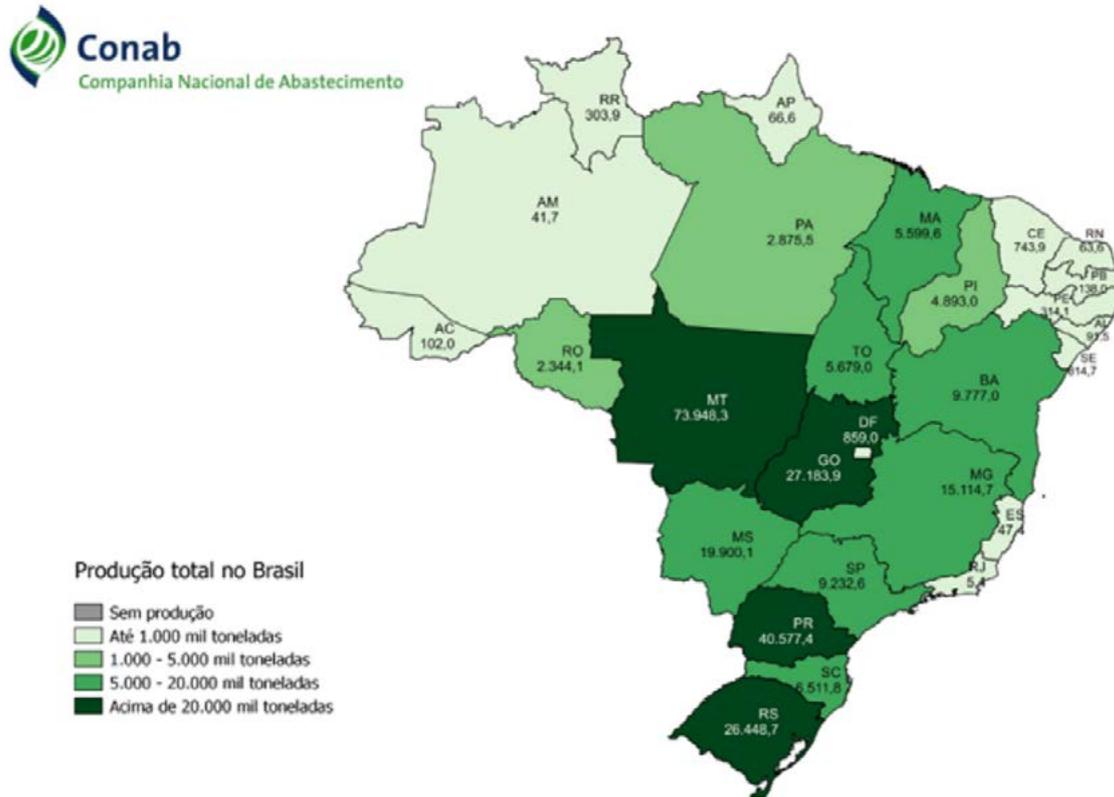
Foto 2 – Las quemadas en el Pantanal



Fuente: Araquén Alcântara. <https://gazetaweb.globo.com/portal/>

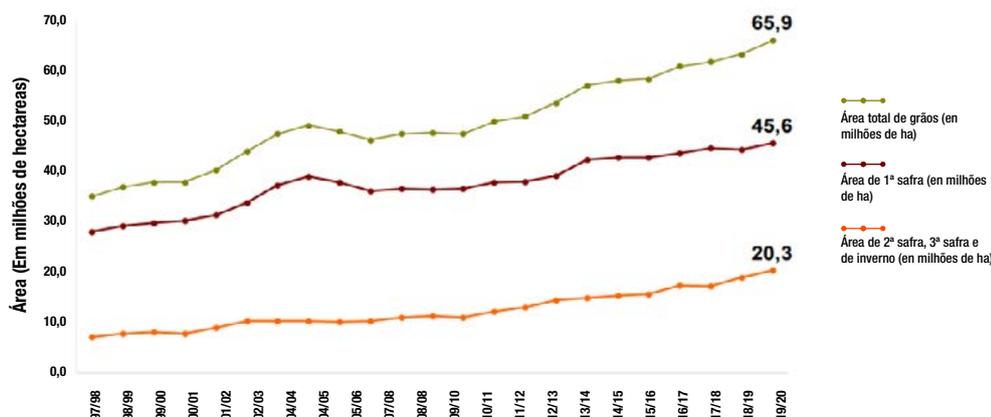
⁴ Pueden verse más fotos registradas por Araquén Alcântara en https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/vi-a-face-do-horror-diz-fotografo-que-registrou-destruicao-no-pantanal_115843.php. Consulta: 28/09/2020.

En contrapartida a las imágenes del horror retratadas por el fotógrafo, la grandeza de la producción de las *commodities* aparece en los números siguientes:



Mapa 1 - Producción de granos (mil toneladas) en 2020

Los datos del mapa demuestran la producción del estado de Mato Grosso, con casi 74 millones de toneladas solamente en los ocho primeros meses del año. En este estado, según la ideología del *agribusiness*, *el granero del mundo*, la soya es el producto predominante, cuya exportación es destinada a los mercados de China, sobretodo.



Gráfica 1 – Área total de granos por zafra
Fuente: Conab.

Además de las extensiones de áreas sembradas, hay otro factor importante a ser considerado. Los datos de la Gráfica 1 muestran tres líneas: a) total del área; b) total de la primera cosecha; c) total de la segunda cosecha. Por lo tanto, los terratenientes tienen mayores ganancias, gracias al aumento de productividad en función de la renta diferencial de localización geográfica del país en la zona tropical.

Cuadro 1 – Exportación de commodities

Mineral de hierro:

2020 (Junio)

30, 5 millones de toneladas: > 1,34% en relación a junio de 2019

Etanol:

2019 (enero-agosto): 612,21 millones de dólares

2020: (enero-agosto): 660 millones de dólares

Hasta agosto de 2020: 1,45 mil millones de litros: 25% más que en el período igual de enero-agosto de 2019

Azúcar:

2019 (enero-agosto): 10, 91 millones de toneladas;

2020 (enero -agosto): 17,89 millones de toneladas

64% más

Soya

2019 (enero-agosto): 51 millones de toneladas

2020 (enero-agosto): 70 millones de toneladas
38% más

Carne suina

2019 (enero-agosto): 469 mil toneladas

2020 (enero-agosto): 678,3 mil toneladas
44% más

Carne bovina

2020 (enero-junio): 909 mil toneladas

26% más que en igual período de 2019

Carne de pollo

2020 (enero-agosto): 172 mil toneladas

28% más que en igual período de 2019

En lo que se refiere a las exportaciones, los datos apuntan también un crecimiento en estos primeros meses del año: azúcar, soya, etanol, carnes y mineral de hierro. Estas son las *commodities* principales en el mercado global.

En este sentido hay una combinación de producción agrícola y extracción de los recursos naturales, no solo a los minerales, como el hierro. Brasil es el mayor productor de hierro del mundo. El 70 por ciento del hierro se exporta a China, al igual que la soya y la carne bovina. El hierro de Carajás (Pará) tiene un 65% de hematita, por lo que es el hierro más puro del planeta. Además, el país exporta niobio, bauxita, manganeso, oro. En cuanto a la producción agrícola, cada vez más se observa el acaparamiento de las tierras indígenas, *quilombolas* y campesinas por grandes empresas. Por lo tanto, el proceso de la extracción va de la mano al de la expulsión. Los datos apuntan a una economía neoextractivista con marcas de la colonialidad, según la definición de Quijano (1999). Podemos decir que es el modelo paradigmático de economía de pinchazos y el mismo tiempo de economía de expulsión, que no se refiere solamente a la pérdida de las tierras, pero de un espacio de vida. Según la pensadora Sassen (2016):

(...) expulsiones: de proyectos de vida y de medios de vida, de membresía, del contrato social que está en el centro de la democracia liberal. Va mucho más allá de simplemente más desigualdad y más pobreza (...) Implica a generalización gradual de condiciones extremas que empiezan en los bordes de los sistemas, en microambientes (p. 41).

Al respecto, hago un paréntesis para relatar el testimonio de un campesino que vivía con su familia a orillas del río Xingu, en la cuenca del Amazonas. En 2011, durante el Gobierno del PT, se iniciaron las obras de construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte. Esta hidroeléctrica ha causado muchos problemas ambientales y sociales, desde el inicio de las obras en la región. Muchos campesinos del río se han trasladado a otros lugares. Durante la construcción de este megaproyecto, hubo muchas protestas de ambientalistas, científicos, trabajadores rurales y urbanos y campesinos. Protestas de ambientalistas nacionales e internacionales. Durante una de estas protestas, escuché el siguiente informe de un campesino. Unos días antes de la expulsión, un técnico de la constructora se dirigió a su casa y le pidió que hiciera una lista de sus bienes para la evaluación de los valores de compensación. Entonces, el técnico le entregó una hoja de cálculo para que la llenara. Contenía el número de gallinas, cerdos, ovejas, caballos, así como herramientas de trabajo, casa y otros materiales, además de la cantidad, se debían llenar los precios respectivos de cada artículo. Al día siguiente, el técnico regresó a su casa y le pidió la hoja de cálculo completa. Sin embargo, el campesino se lo dio sin ningún dato. Ante el hecho, el técnico le preguntó por el motivo de no declarar los bienes. Entonces, el campesino le respondió.

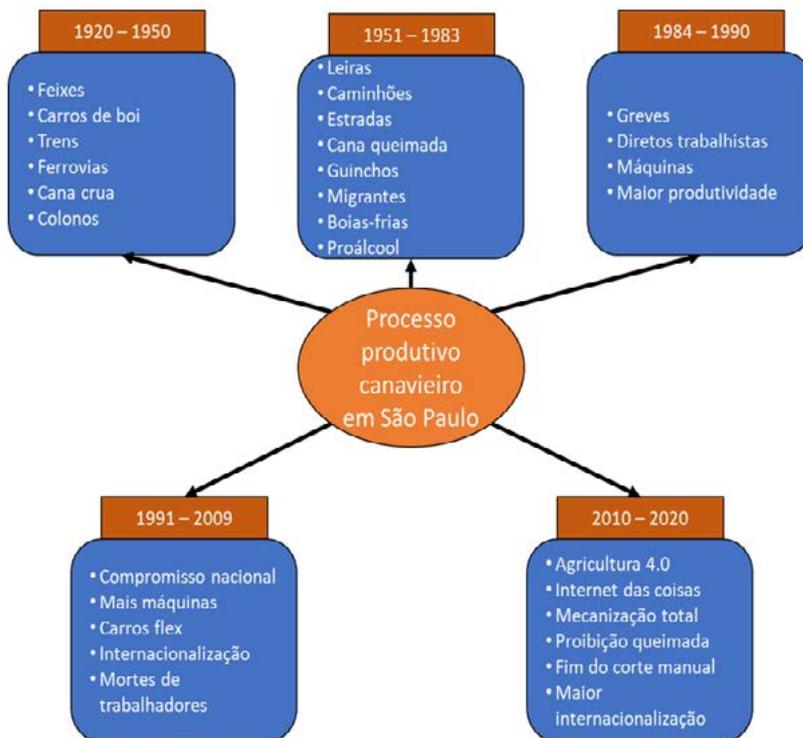
“Pasé la noche escribiendo la historia de mi familia, ya que mi padre vino del noreste a este lugar hace más de 50 años. Siempre ha sido un lugar de nuestra familia, nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria. Aquí es un lugar donde nací, donde me casé y donde nacieron mis hijos. No sé cómo evaluar el precio de la vida de mi familia. Te pido que lo hagas”.

Así, se entregó al técnico una microhistoria de personas invisibilizadas y negadas por el proyecto modernizador. Después de algunos años, supe que la familia de este campesino fue desplazada para un asentamiento lejano, donde no había río. Fue acometido por la depresión psíquica, no se sentía más como campesino y tenía ganas de salir del asentamiento e ir para la ciudad.

Este es un ejemplo de miles y miles de personas desplazadas, expulsadas de sus lugares, de sus espacios de vida. No se trata de cambiar de tierra. La tierra no es solamente la materialidad, pero, hay que considerar sus significados, sus símbolos, su membrecía, como afirma Sassen. La tierra para este campesino del río era su complemento, su extensión, su cuerpo inorgánico en los términos de Marx. El río era un marcador muy importante de su identidad. Incluso en su relato, ha mencionado las fiestas en las orillas del río, los peces, los paseos de barco con los hijos. Al ser quitado del río, era como si le hubiera pasado un desmembramiento.

Sin embargo, el proceso de acumulación del capital globalizado también tiene otra cara, que es el avance tecnológico. Con base en mis investigaciones, elaboré el siguiente diagrama sobre el avance tecnológico de la producción de caña de azúcar en el estado de São Paulo, que es el mayor productor de azúcar y etanol del país.

Figura 1 - Evolución del proceso productivo cañero en San Pablo (1920-2020)



El diagrama demuestra la evolución del proceso del trabajo y los cambios tecnológicos en el espacio de 100 años. Considerando el inicio en 1920, se observa que el modo de producir se basaba en la fuerza de trabajo de familias de colonos, es decir de trabajadores inmigrantes (italianos, españoles, japoneses etcétera) que residían en las haciendas. La fuerza de trabajo era familiar y la caña era transportada por medio de carros de bueyes hasta las estaciones de ferrocarriles, y en seguida por los trenes hasta los ingenios. A partir de los años 1950, hubo un cambio en las relaciones de trabajo. No más los trabajadores permanentes, pero los temporeros originarios del nordeste del país. Tratase de una *migración permanentemente temporera* para la cosecha de caña, sobre todo. A partir de los años de 1990, hay un incremento de máquinas cosechadoras que cada vez más sustituyen la mano de obra. Finalmente, en el día de hoy, los trabajadores migrantes cosechadores de caña fueran extintos por las máquinas y otros medios tecnológicos como la agricultura 4.0.

Según un informe publicado en la revista Pesquisa Fapesp⁵, el uso de tecnologías de la información (TIC) está transformando la agricultura brasileña, brindando mayor productividad y mejoras en la sostenibilidad ambiental. Este uso es cada vez más frecuente entre los grandes productores de *commodities*, como soja, maíz, caña de azúcar, cítricos, café y carnes. Según el informe, la implementación de la denominada ‘agricultura 4.0’ consiste en información precisa y en tiempo real a través de sensores terrestres, drones, sistemas de rastreo, vía satélite, capaces de recolectar datos sobre productividad, características del suelo, variación climática e incidencia de plagas. Los tractores y las máquinas agrícolas están equipados con sistemas que permiten el control y la operación a distancia. La producción de este conocimiento es fruto de la investigación de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), de varias Universidades, centros de investigación y también de startups, además del apoyo de Fapesp desde 1996⁶.

⁵ Janeiro de 2020, Ano 21, N.287, p 12-29.

⁶ La agricultura digital recibió el apoyo de Fapesp en el período de 1996 a 2019. Fueron financiados 275 proyectos entre becas y apoyos, y 50 PIPEs (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas).

En cuanto a la producción de caña de azúcar, la planta São Martinho, ubicada en Pradópolis (SP), mediante la implementación de una red 4G, monitorea los datos generados por más de 700 vehículos agrícolas utilizados en sus 135 mil hectáreas. El trabajo digital está controlado por 50 empleados. El mismo informe de la revista pesquisa Fapesp:

A rede, criada com o Centro de Pesquisa em telecomunicações (CPQD) de Campinas usa a tecnologia de transmissão Long Term Evolution (LTE) (...) Tratores, colheitadeiras e caminhões foram equipados com um dispositivo Terminal Inteligente veicular (TI), cuja função é capturar e transmitir as informações em dados, vídeo e voz geradas em dezenas de sensores e aparelhos de bordo instalados nos veículos (...) A interoperabilidade, ou seja, a capacidade dos diversos sistemas trocarem informações entre si, é viabilizada por uma plataforma de software livre para o IoT, a Dojot, também desenvolvida pelo CPQD (...) uma frota de 100 caminhões roda 46 mil quilômetros por dia de operação. Os veículos são monitorados em tempo real (...) p.15.

Altacir Bunde (2017, p. 216), geógrafo brasileño en su investigación, adopta el concepto de 'fusionar la explotación' territorial de la mano de obra por grupos monopolistas del sector azucarero-energético brasileño mediante el uso de tecnología, para demostrar -especialmente en grupos económicos extranjeros como es el caso del Grupo Raízen- que a través de la tecnología y/o automatización, estos capitalistas estandarizan el proceso de explotación laboral, incluso si sus plantas están geográficamente dispersas unas de otras. Así, con el uso de la tecnología, el Grupo Raízen fusiona la explotación territorial de la mano de obra y, a partir de ahí, implementa una estandarización del índice de explotación de la mano de obra en sus 24 plantas, independientemente de su ubicación geográfica.

Según datos del Censo Agropecuario (IBGE), registrados en ese informe, en Brasil, hubo un aumento significativo en el número de propiedades rurales con acceso a la red de internet (+ 1900%), de 75 mil a 1,4 millones en el período de 2006 al 2017. En cuanto al dato de maquinaria, el incremento también fue significativo en este período: los tractores pasaron de 82 mil a 1,2 millones; sembradoras y plantadoras de 318,2 mil a 357,8

mil; los fertilizantes y distribuidores de piedra caliza de 147,8 mil a 253,2 mil; cosechadoras de 116.000 a 172.200.

Sin embargo, aunque es una información prometedora para la producción de *commodities*, los datos PNAD-Continuos revelan que, en lo que respecta a los trabajadores rurales, hubo una disminución en el número de empleados en alrededor de 1,6 millones de personas, en el período de 2012 a 2018. Y más aún. Del total de ocupados, el 23% no sabe leer ni escribir; 49% tiene educación primaria; 15% bachillerato y solo 6% educación superior. En 2017, el número de trabajadores empleados en la agricultura fue de 15,1 millones, frente a los 15,5 millones de 1960.

Estos datos revelan que existe una creciente desigualdad marcada por el aumento en la concentración de la propiedad de la tierra, el capital, la mecanización y también el acceso al conocimiento científico, tecnológico y de las tecnologías de la información.

Mis investigaciones muestran que el desarrollo tecnológico va de la mano con el aumento en el uso de agroquímicos, por lo tanto, con la mayor degradación de la salud de los trabajadores (De Moraes Silva, Verçoza 2020). Además del desempleo provocado por el uso de máquinas, que en el caso de la caña de azúcar cada máquina sustituye a 120 trabajadores, hay otro factor a tener en cuenta, que es el empleo de mujeres en tareas muy descalificadas como recoger piedras para no dañar las cuchillas de las máquinas. Entonces concluyo que la mecanización corresponde al aumento de la productividad, el uso de agroquímicos y la degradación de la mano de obra.

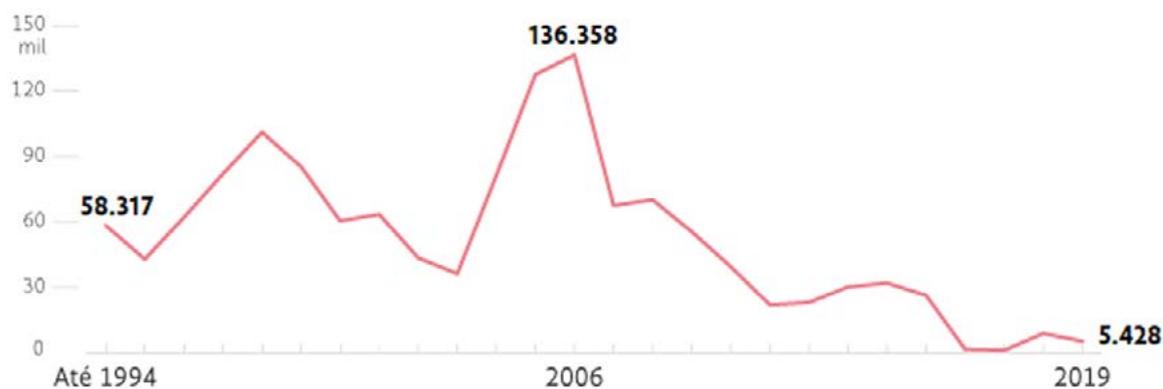
La producción de materias primas tiene el apoyo del estado brasileño. Así, desde 1996, durante el gobierno de FHC, se elaboró la Ley Kandir, según la cual las exportaciones de *commodities* no pagan impuestos. El lema era *exportar es lo que importa*. Este es un punto muy importante para comprender el proceso de concentración de ingresos y también la fuerza política de los terratenientes en el país. La representación ruralista en el congreso nacional supera el 60%. Otro

punto se refiere a los subsidios de Estado, por ejemplo, la producción de etanol. El control de los precios de la gasolina arriba de los precios internacionales. Así es posible aumentar los precios del etanol hasta al punto de ser competitivo con la gasolina. El bloque de poder aprueba las leyes de su interés principal. Entonces considero que en el país hay un modelo de neoliberalismo/neocolonialismo, donde el poder está en manos de los productores de materias primas, incluidos los recursos naturales.

El Estado y las desigualdades

El Estado es un promotor de la desigualdad social. Un ejemplo es prácticamente el fin de la reforma agraria en el país decretada por el actual gobierno. Los siguientes gráficos muestran que una forma de extinguir los asentamientos de trabajadores rurales fue por medio de la retirada del apoyo financiero, sin mencionar que el gobierno eliminó el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y también el Ministerio de Trabajo.

Gráfica 2 – Número de familias asentadas por año



*Ação nova Fontes: Inkra e dados da Lei Orçamentária de 2020 e do Projeto de Lei para o Orçamento de 2021 compilados pela liderança do PT na Câmara

Gráfica 3 – Fondos de los programas del Inkra para 2021 en comparación con 2020

	Valor establecido pelo governo para 2021, em R\$	Varição em relação à Lei Orçamentária de 2020, em %
Sentenças judiciais transitadas em julgado	2,1 bi	21,6
Consolidação de assentamentos rurais	22,3 milhões	-71,1
Monitoramento de conflitos agrários e pacificação no campo	84,8 mil	-82,3
Reconhecimento e indenização de territórios quilombolas	329,8 mil	-89,8
Concessão de crédito-instalação às famílias assentadas	16,2 milhões	-93,4
Aquisição de terras	668,7 mil	-94,6
Reforma agrária e regularização fundiária	32,4 mil	-99,5
Promoção da educação no campo	20,5 mil	-99,8
Assistência técnica e extensão rural	7.570	-99,9
Organização da estrutura fundiária*	15 milhões	-

Fuente: Ação Nova a partir de Inkra e dados da Lei Orçamentária de 2020 e do Projeto de lei para o Orçamento de 2021 compilados pela liderança do PT na Câmara.

Disponilbe en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml>. Acceso: 07/09/2020.

Los datos de las gráficas superiores son un indicativo de las desigualdades sociales producidas por el Estado por medio de la desestructuración de los organismos públicos responsables por la agricultura familiar, campesina y de los asentamientos rurales. Las medidas económicas registran la “intención programada” a corto plazo para la eliminación de los estratos sociales de la producción familiar. Los recortes de los recursos financieros destinados a la educación en el campo, la reforma agraria, los créditos, asistencia técnica y apoyo a los asentamientos, evidencian no sólo el retroceso político sino también la representación de un verdadero estado de excepción en relación a los pequeños productores, que son los responsables de producir el 70% de los alimentos consumidos por la población brasileña. De este modo,

se verifica a largo plazo el aumento de los precios de los alimentos, lo que agrava más aún la situación alimentaria de millones de personas en situación de pobreza⁷.

Otra información de la gráfica 2 se refiere a la disminución acelerada del número de familias en los asentamientos rurales. Sin embargo, esta tendencia se observa desde el año 2006, durante el segundo mandato del presidente Lula da Silva, que continuó en los gobiernos de Dilma Rousseff y en los siguientes. Esto representa un golpe en la lucha por la reforma agraria en el país, articulada, sobre todo por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

Las reformas laborales y de seguridad social implementadas después del *impeachment* de Dilma Rousseff fueron los principales instrumentos para desmontar la protección social de los trabajadores. En contrapartida, hubo un crecimiento de la *uberización*, es decir de los trabajadores por cuenta propia, los informales y temporeros, sin contar los más de 13 millones de desempleados actuales. Los trabajadores asalariados rurales fueron muy afectados por la pandemia y también por los cambios laborales causados por las reformas instituidas por el Estado y por el desempleo en razón del crecimiento de la mecanización. La situación de estos trabajadores es la permanencia del nomadismo en búsqueda de trabajo para la sobrevivencia. Con la pérdida de los derechos sociales, se produjo también el aumento de los casos de trabajadores en situación de esclavitud.

7 Los datos publicados por la FAO revelan que el hambre ha aumentado nuevamente en Brasil. Según la organización, 37,5 millones de personas vivían en una situación moderada de inseguridad alimentaria en el país entre 2014 y 2016. Entre 2017 y 2019, sin embargo, esa cifra llegó a 43,1 millones. En términos porcentuales, el número también aumentó del 18,3% al 20,6%. Fuente: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/07/13/onu-inseguranca-alimentar-aumenta-no-brasil-e-atinge-43-milhoes-de-pessoas.htm>. Acceso: 14/07/2020.

Foto 3 – Cosecha de carnauba en Ceará



Fuente: <https://reporterbrasil.org.br/2020/04/cafeicultor-com-selo-de-qualidade-nucoffee-da-syngenta-e-um-dos-41-novos-nomes-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/> Acceso: 15/09/2020

Este es un ejemplo de trabajadores migrantes en la cosecha de carnauba en situación de esclavitud, según los fiscales. En la acción fueron rescatados 20 trabajadores que se encontraban en una situación similar a la esclavitud y Raimundo (el propietario) entró en la ‘lista sucia’⁸. Ninguno

8 La ‘lista sucia’ de trabajo esclavo es una base de datos creada por el gobierno en noviembre de 2003. El registro expone casos en los que personas fueron rescatadas en condiciones consideradas análogas a la esclavitud. Antes de ingresar al registro, los empleadores tienen derecho a defenderse en dos instancias administrativas del extinto Ministerio de Trabajo, ahora incorporado al Ministerio de Economía. Los empleadores involucrados en este crimen permanecen en la lista durante dos años. Si llegan a un acuerdo con el gobierno, el nombre está en una “lista de vigilancia” y se puede dar a conocer al cabo de un año, si se cumplen los compromisos. El registro ha sido utilizado para análisis de riesgo por inversores y bancos públicos y privados. Además, hay empresas brasileñas e internacionales que evitan cerrar tratos con estos empleadores. Cuatro elementos pueden definir la esclavitud contemporánea, según el artículo 149 del Código Penal: trabajo forzoso (que implica restringir la libertad de dejar al empleador), servidumbre por deudas (una servidumbre vinculada a deudas, a menudo fraudulenta), condiciones degradantes de trabajo que niega la dignidad humana, poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la vida) o un viaje agotador (que lleva al trabajador al completo agotamiento por la intensidad de la explotación, poniendo también en riesgo su salud, seguridad y vida). Disponible en: <https://reporterbrasil.org.br/2020/04/cafeicultor-com-selo-de-qualidade-nucoffee-da-syngenta-e-um-dos-41-novos-nomes-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/> Acceso en 15/09/2020.

de los trabajadores tenía constancia en sus tarjetas de trabajo, algunos dormían en chozas de paja y otros debajo de árboles. Tenían una jornada de trabajo que comenzaba a las 5 de la mañana y se extendía a las 5 de la tarde. No tenían baño: “Se bañaban en un arroyo que pasa cerca de la comunidad, sin garantía de privacidad y en aguas visiblemente inadecuadas para la limpieza del cuerpo humano”, informaron los auditores⁹.

Algunas palabras finales

El tema propuesto en este Conversatorio incluye las resistencias y las protestas. En estos meses de pandemia, hubo protestas aisladas, ubicadas en algunas regiones del país.

En el final de agosto, tuvo lugar la recuperación de un área ocupada por campesinos quilombolas, Campo do Meio, en Minas Gerais. La policía, bajo las órdenes del gobernador destruyó todos los cultivos, incluso los hogares y la escuela. Son campesinos del MST y hacía 20 años que estaban produciendo en aquellas tierras. En cuanto a los trabajadores rurales no hubo protestas. Asistimos cada vez más a una diáspora real, debido a la mecanización, la desprotección social y laboral debido a las reformas laborales y de la seguridad social. Cada vez vemos más, como fue dicho, el crecimiento del empleo temporal, informal y desprotección social.

En lo que se refiere a los indígenas, hay una expropiación/pinchazo de tierras causada por el incendio de la selva amazónica, Pantanal, además de la extracción de oro por mineros ilegales. También existe la contaminación de las aguas del río por mercurio, lo que pone a las poblaciones nativas y campesinos del río, en situaciones de mayor vulnerabilidad, sin mencionar los asesinatos de líderes indígenas y campesinos.

⁹ Fuente: <https://reporterbrasil.org.br/2020/04/cafeicultor-com-selo-de-qualidade-nucoffee-da-syngenta-e-um-dos-41-novos-nomes-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/> Acceso: 15/09/2020

Por la ley N. 303 el actual gobierno quito los derechos de los pueblos indígenas y el Congreso Nacional no apruebo el Código Forestal, que pone al sistema ecológico en la ruta del ecocídio¹⁰.

Finalmente, lo que ocurre en el país, particularmente en el campo, es un verdadero brutalismo, según A. Mbembe. Brutalismo en relación a la punción de los recursos naturales y también sobre cuerpos racializados, incluidos los indígenas los negros, trabajadores rurales, campesinos quilombolas, y campesinos de los ríos.

REFERENCIAS

- Bunde, Altacir. *Os impactos dos investimentos externos diretos (ieds) sobre a (re) estruturação e estrangeirização do setor sucroenergético no Brasil*. Tese (doutorado em Geografia), Universidade Federal de Goiás, 2017.
- De Moraes Silva, María Aparecida.; Verçoza, Lúcio. (Orgs.). *Vidas tejidas al reverso de la historia. Estudios sobre el trabajo en los cañaverales y los campos de flores em Brasil*. Buenos Aires: CLACSO, 2020.
- Mbembe, Achille. Necropolítica. Biopoder, soberanía e estado de exceção política da morte. *Temáticas*, n. 32, V. 16, 2016, pp. 1-30. Disponible en: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acceso en: 10/04/2020.
- Mbembe, Achille. *Brutalisme*. Paris: La Découverte, 2020.
- Sassen, Saskia. *Expulsiones. Brutalidad, y complejidad en la economía global*. Buenos Aires: Katz Editores, 2015.
- Quijano. Aníbal. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. En: Castro-Gómez, Santiago; Guardiola-Rivera, Oscar; Millán de Benavides, Carmen. (eds.). *Pensar em los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial* Bogotá: CEJA, 1999.

¹⁰ Hasta al final de agosto, más de 30 mil indígenas fueron infectados por la pandemia del coronavirus y 791 muertos.

Crisis y desigualdad social

Una lectura de la brecha rural-urbana

Luis Camarero*

Buena parte de las áreas rurales del sur de Europa vienen experimentando desde finales del siglo pasado un importante declive demográfico. Sobre esta situación se añaden los efectos de la crisis financiera global de 2008. Sus efectos en forma de recesión económica, de contracción de políticas públicas y de intensificación de la precariedad laboral fueron intensos, ampliaron las diferencias sociales y abrieron nuevas fuentes de desigualdad. Buena parte de las áreas rurales experimentaron una nueva ola de emigración, mientras se paralizaba la llegada de población extranjera y el reagrupamiento familiar de quienes ya se habían establecido. A su vez las pequeñas localidades experimentaban una drástica reducción de la aportación de fondos públicos mientras que en las áreas de baja densidad se producía la retirada de operadores privados de servicios. La crisis se experimentaba de forma desigual para habitantes

* Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social. UNED. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

rurales y urbanos, no sólo en condiciones económicas sino también en términos de ciudadanía.

En la búsqueda de una explicación causal del secular declive socioeconómico que se establece en las áreas rurales resulta fundamental el argumento de Rodríguez Pose (2018). Para este autor nuestro modelo económico vigente de aglomeración implica la conformación de un territorio desigual en oportunidades y acceso a los recursos. Las economías de escala se basan en la concentración espacial de capital, recursos y talento. Su resultado visible son la emergencia y extensión de las grandes metrópolis. Hemos reconocido e incluso asumido algunas de las externalidades que produce este modelo como son, por ejemplo, la contaminación y la pérdida de calidad ambiental de regiones enteras. Sin embargo, las consecuencias de dicho modelo que atañen precisamente a los territorios rurales y a quienes en ellos habitan han quedado diluidas, sin que exista un reconocimiento explícito, ni académico, pero tampoco político de fenómenos como la despoblación, la agudización de los desequilibrios demográficos, la desvalorización de grupos sociales enteros, la pérdida de capital social o el declive económico regional. Estos efectos no sólo han quedado invisibilizados, sino que se ha alterado su explicación causal hasta el punto en que incluso se ha terminado considerando a las poblaciones que residen en áreas rurales como malos o deficientes gestores de su propio destino.

En la actualidad sobre las áreas rurales podemos distinguir una concatenación de círculos viciosos que alimentan procesos encadenados de declive socioeconómico. El círculo de declive demográfico: la emigración, en la medida en que es selectiva y se concentra en la población joven afecta en muchas de las áreas rurales a las capacidades de revitalización poblacional e incrementa el envejecimiento y altera el equilibrio generacional. Equilibrio que es el soporte del desarrollo económico, pero también de la economía de cuidados. El círculo de la accesibilidad: la reducción demográfica y baja densidad inciden en la progresiva desinversión en servicios públicos -establecidos según rentabilidad por densidad y concentración demográfica-. Este proceso paulatinamente genera bolsas de baja accesibilidad a recursos y condiciona progresivamente el

acceso a los sistemas públicos de bienestar. El círculo de la formación: la carencia y lejanía de centros educativos reduce las oportunidades formativas y se generan bolsas de trabajo fuertemente descualificado mientras se alejan las oportunidades de innovación y de inserción en las economías del conocimiento. El círculo del mercado de trabajo: la baja densidad, desinversión y descualificación conforman finalmente un escenario de baja empleabilidad, fuerte precarización del empleo local que se transmite en bajos niveles salariales, que provocan nuevos procesos de emigración. Población, recursos públicos, empleo y talento alimentan el extractivismo de las metrópolis sobre las áreas rurales. Estas cuatro esferas de problemas rurales -demografía, accesibilidad, educación y mercado de trabajo (European Commission, 2008) interactúan produciendo auténticas espirales de deterioro de las condiciones y oportunidades locales de desarrollo que amplifican las diferencias urbano-rurales en términos de desarrollo vital.

La actual crisis sanitaria, que al igual que lo hizo la crisis del 2008 afecta al empleo y a la distribución de fondos públicos y retroalimenta aún con más fuerza estos círculos viciosos incrementando las desigualdades sociales. Desigualdades que no sólo afectan al interior de la propia estructura social de la población rural, sino que también y especialmente amplían la brecha rural-urbana.

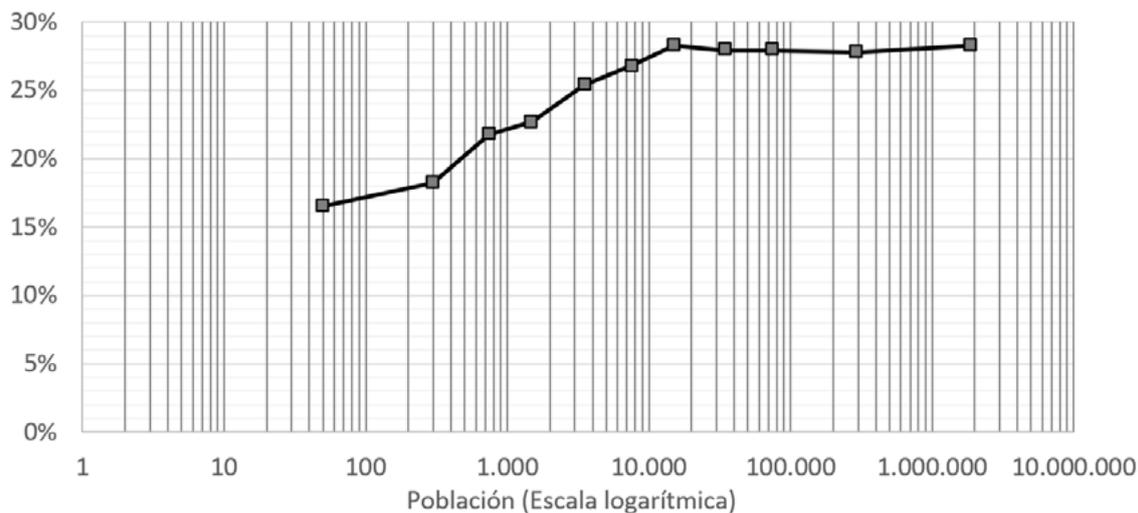
Declive demográfico y descapitalización social

En el caso de España la crisis de 2008 produce un vuelco importante en las tendencias demográficas: incrementa el saldo vegetativo negativo e invierte los procesos de asentamiento y reagrupación de familias inmigrantes, acrecienta la salida de jóvenes y ralentiza la entrada de nuevos residentes rurales que hasta ese momento eran un fuente determinante de revitalización (Camarero 2020). Como consecuencia de la crisis todos los indicadores demográficos se tornan por primera vez negativos. No hay crecimiento poblacional.

El proceso de concentración demográfica urbana tiene su reverso en el proceso de descapitalización social de las áreas rurales. La emigración juvenil no solo debilita la capacidad demográfica y genésica rural sino que supone también una pérdida del capital humano necesario para organizar el desarrollo económico y el bienestar social. El concepto de *capital social* condensa el solapamiento que muestran en la vida real las relaciones económicas y sociales, y ha sido interpretado como el factor que predispone para el desarrollo local (Garrido y Moyano: 2002). Por un lado, define la capacidad de los territorios de mantener culturas de colaboración y organización cívica; estructuras y redes sociales. Pero el capital social también refiere la capacidad de promover proyectos, cambios o la resiliencia que afronta el mundo rural frente a los cambios de orden global. Los territorios ricos en *capital social* incrementan sus oportunidades y el bienestar social de su población (Li, Westlund y Liu: 2019).

El gráfico -figura 1- muestra con claridad la contracción que vienen experimentando las áreas rurales en términos de capital social. Como indicador sintético de vitalidad demográfica se ha considerado el grupo de población de entre 25 a 44 años edades entre las que se concentra la capacidad genésica y se aprecian las tasas de actividad y ocupación más elevadas. Observamos que mientras en los municipios mayores de 10.000 habitantes el 30%, cerca de la tercera parte, de su población se sitúa en este grupo vital, en los de menor tamaño esta cifra se reduce a la cuarta parte e incluso llega a situarse por debajo de la quinta parte. La relación entre capital social y tamaño poblacional resulta evidente y debe interpretarse como resultado de un proceso de extracción demográfica con origen en las áreas de baja densidad y destino en los grandes centros metropolitanos.

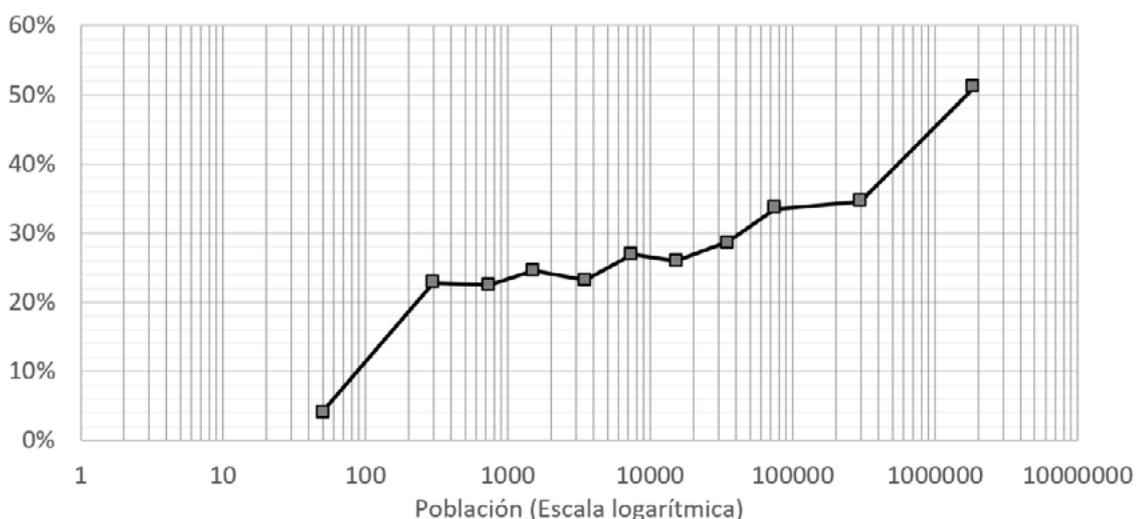
Figura 1 - Porcentaje de población entre 25 y 44 años por tamaño de municipio. 2019



Fuente: Encuesta Continua de Población. 2019. INE. Elaboración propia.

En consonancia con este proceso de extractivismo demográfico y vital también se observa la concentración de talento y capital cultural en las áreas metropolitanas -figura 2-. Mientras los universitarios rondan el 20% en los municipios rurales estas cifras llegan a doblarse y superar al 50% del total en los grandes centros urbanos. El despoblamiento actual produce un fuerte desequilibrio territorial en recursos humanos y capacidad de innovación. Hay una fuerte desigualdad territorial en términos de conocimiento que dificulta a las economías locales insertarse en los flujos económicos que definen la sociedad de la información. La retroalimentación entre emigración, conocimiento y capital social genera círculos de declive que se transmiten a la larga en círculos de exclusión social. Diferentes estudios coinciden en señalar que las zonas europeas en términos de despoblación muestran una mayor tasa de deserción escolar y una mayor proporción de personas en riesgo de pobreza (Delivorias y Sabbati: 2005).

Figura 2 - Porcentaje de población con estudios universitarios por tamaño de municipio. Personas de 25-44 años. 2019



Fuente: Encuesta Continua de Población. 2019. INE. Elaboración propia.

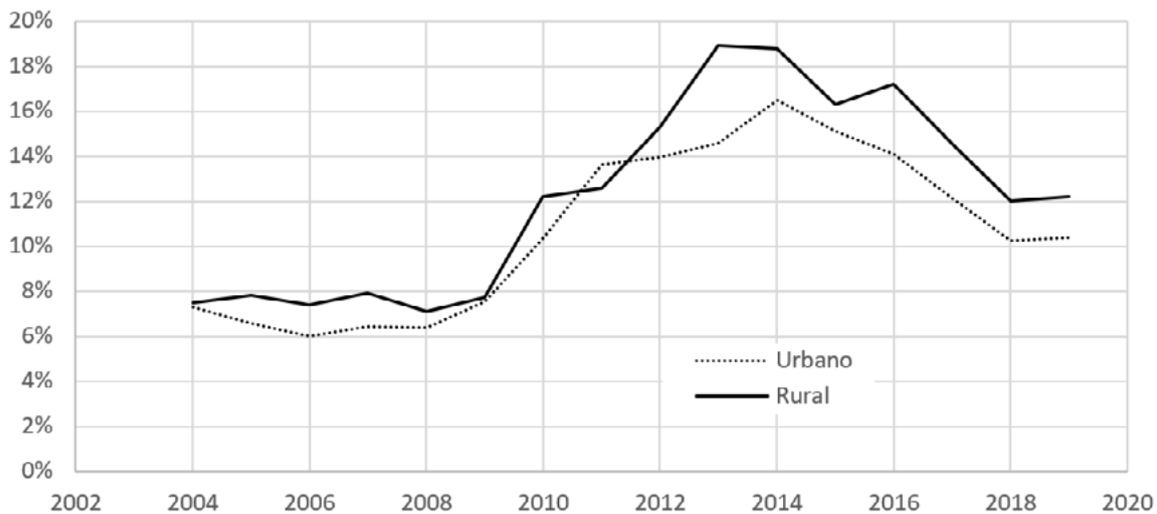
En este sentido para estudiar los efectos de la crisis un indicador relevante, que pertenece al AROPE¹, son los hogares con baja intensidad de empleo². La crisis ha supuesto un incremento generalizado de estos hogares durante el periodo 2009-2014 (Vid. figura 3). Las áreas rurales han llegado durante los años que duró la recesión económica a alcanzar valores muy elevados: cerca de un quinto de los hogares no llegaban a situarse en los niveles mínimos de ocupación. Y, aunque desde 2014 se observa que lentamente se van recobrando los valores anteriores al comienzo de la crisis, lo que no se reducen son las diferencias rural-urbano en términos de vulnerabilidad laboral. La crisis ha ampliado y cronificado dichas diferencias. En este sentido se ha amplificado la brecha rural. Precariedad y descualificación se concentran en las áreas rurales y se añaden a la continuada merma de capital social. El resultado es

¹ AROPE, es la abreviatura de la expresión At Risk of Poverty and/or Exclusion. Este indicador unificado para toda la Unión Europea tiene tres componentes: Pobreza material severa, Riesgo de pobreza después de transferencias sociales y Hogares con muy baja intensidad laboral.

² Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista.

especialmente dañino para las áreas rurales porque reduce drásticamente su capacidad de inserción en las economías de la información.

Figura 3 - Porcentaje de personas en hogares con muy baja intensidad de empleo. Evolución 2004-2019



Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Eurostat. Elaboración propia.

En zonas urbanas se han incluido las categorías de la clasificación *Degree of urbanisation* correspondientes a *Cities, towns and suburbs*.

Círculos de declive y brecha urbano-rural

Las sociedades modernas se basan en la premisa de la igualdad en el acceso a oportunidades y a los recursos. Esta cuestión continúa siendo un desafío importante para las zonas rurales. Por una parte, las carencias en términos demográficos impiden a las áreas rurales alcanzar volúmenes críticos en términos de capital social. Como hemos expuesto en el contexto actual de avance de la economía del conocimiento la carencia de capital social en áreas rurales termina dirigiendo los procesos de innovación hacia las áreas urbanas y, consecuentemente, se acrecienta la marginalización de las áreas rurales. (Li, Westlund and Liu, 2019). Por otra parte, la distribución de los dispositivos de bienestar en función

de criterios de demanda agregada, frente a criterios de equilibrio territorial, supone un acceso desigual por parte de la población rural a los servicios públicos. (Shuckmith and Brown, 2016. Bock, 2019).

Las desventajas territoriales a las que se enfrentan las áreas rurales exigen sobre sus habitantes un esfuerzo en movilidad a través de los desplazamientos cíclicos y diarios para acceder a los mercados laborales, educación y salud, ocio o bienes de consumo. La movilidad como principal mecanismo de reequilibrio vuelve a generar nuevas desigualdades en la medida en que la capacidad para la movilidad no es homogénea (Camarero y Oliva: 2018). En las sociedades modernas existen fuertes interconexiones entre la movilidad física y social hasta el punto, que podemos considerar a la movilidad al mismo nivel que la equidad o la individualidad en cuanto principios definitorios de la modernidad. (Canzler, Kaufmann y Kesserling 2008).

La brecha rural se refiere a la incapacidad de las áreas rurales para equipararse en los estándares de calidad de vida, servicios y oportunidades con los entornos urbanos (Camarero y Oliva, 2019). Puede definirse como el efecto acumulativo de diferentes procesos (demográficos, económicos, ...) y disparidades (accesibilidades, mercados de trabajo, ...). Estas diferencias y condicionantes tomadas en conjunto conforman un importante hándicap para el bienestar y el futuro de muchas áreas rurales insertas en fuertes desequilibrios y evidentes desigualdades.

REFERENCIAS

Bock, Bettina (2019) Rurality and multi-level governance. Marginal rural areas inciting community governance. En: Scott, Mark; Gallent, Nick y Gkartzios, Menelaos (eds.) *The Routledge Companion to Rural Planning*. Routledge: New York, pp 103-113.

Camarero, Luis (2020) Despoblamiento, baja densidad y brecha rural: un recorrido por una España desigual. *Panorama Social*, 31: 47-73.

Camarero, Luis y Oliva, Jesús (2018) Movilidades, hibridaciones rurales y paisajes

- sociales. En: Oliva, Jesús (Ed.) *Movilidades, trayectorias vitales y sostenibilidad rural*. Pamplona-Iruña. UPNA. pp. 21-33.
- Camarero, Luis y Oliva, Jesús (2019) Thinking in rural gap: mobility and social inequalities. *Palgrave Communications*, 5: 95: 1-7.
- Canzler, Weert; Kaufmann, Vincent y Keserling, Sven (eds.) (2008) *Tracing Mobilities. Towards a Cosmopolitan Perspective*. London, Routledge.
- Delivorias, Angelos y Sabbati, Giulio (2015) EU demographic indicators: Situation trends and potential challenges. *EPRS*, 2015. <[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551335/EPRS_BRI\(2015\)551335_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551335/EPRS_BRI(2015)551335_EN.pdf)> [Acceso 10-marzo-2020].
- European Commission, (2008) *Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final Study Report*. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Unit E2. <<https://epthink-tank.eu/2016/12/16/rural-areas-and-poverty/>> [Acceso 30-julio-2019].
- Garrido, Fernando y Moyano, Eduardo (2002) Capital social y desarrollo en zonas rurales: Un análisis de los programas Leader II y Proder en Andalucía. *Revista internacional de sociología*, 33:67-96.
- Li, Yuheng; Westlund, Hans y Liu, Yansui (2019) Why some rural areas decline while some others not: An overview of rural evolution in the world. *Journal of Rural Studies*, 68: 135-143.
- Rodríguez-Pose, Andrés (2018). The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 189-209.
- Shucksmith, Mark y Brown, David (2016) Framing Rural Studies in the Global North. En: Shucksmith, Mark y Brown David (eds.) *Routledge International Handbook of Rural Studies*. New York, Routledge 1-26.

| Próximas actividades

Conversatorio virtual: Organizaciones sociales y sindicatos: respuestas y desafíos del escenario actual

18 de noviembre | 12 horas (Argentina) | 10 horas (México)

Participan:

- Irma Soto Vallejo, Universidad de Manizales, Colombia.
- Juan Manuel Villulla, CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Múcio Tosta Gonçalves, Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil.

Coordinación:

- Paola Mascheroni, Universidad de la República, Uruguay.

Inscripciones: <https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-organizaciones-sociales-y-sindicatos-respuestas-y-desafios-del-escenario-actual/>

Conversatorios virtuales realizados



Primer conversatorio virtual: Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades frente al COVID-19

<https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-trabajo-agrario-desigualdades-y-ruralidades-frente-al-covid-19/>

Ver grabación: <https://www.youtube.com/watch?v=C-tAgu3l5g8&t=788s>



Segundo conversatorio virtual: El trabajo rural y la movilidad frente a los desafíos de la post pandemia

<https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-grupo-de-trabajo-clacso-trabajo-agrario-desigualdades-y-ruralidades/>

Ver grabación: https://www.youtube.com/watch?v=DCbkL_uWx2o



Tercer conversatorio virtual: Desigualdades, protesta social y crisis en la ruralidad

<https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-desigualdades-protesta-social-y-crisis-en-la-ruralidad/>

Ver grabación: <https://www.youtube.com/watch?v=qGK4FbCSNBw>



Conversatorio virtual: Cambio social y ruralidades

<https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-cambio-social-y-ruralidades/>

Ver grabación: <https://www.youtube.com/watch?v=eisT5--f3-0>



Boletín del Grupo de Trabajo
Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades

Número 2 · Octubre-Noviembre 2020